

2608607

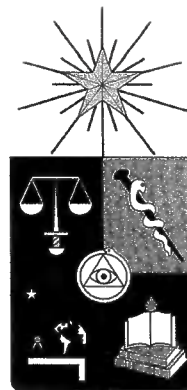
(2)

Toda de  
5826 Ts  
2010  
c 2

**UNIVERSIDAD DE CHILE**

**Facultad de Derecho**

**Departamento de Derecho Privado**



**TRADUCCIÓN DE LA SUBSECCIÓN I DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO TERCERO  
"LES EFFETS DU CONTRAT" DE LA OBRA "LES OBLIGATIONS, LE CONTRAT"  
De Christian Larroumet**

Memoria para optar al Grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

**AUTORA:**

**MARÍA FRANCISCA BRAVO COX**

**PROFESOR GUÍA:**

**MAURICIO TAPIA RODRÍGUEZ**

Santiago, Chile  
2010



## **§ 1.- Los elementos de la responsabilidad contractual**

**4.- Fuentes de la responsabilidad contractual.** El Código Civil dedicó los artículos 1146 y siguientes a la responsabilidad contractual. Éstos constituyen el derecho común, aun cuando falte completarlos por algunas disposiciones que figuran en los artículos 1136 y siguientes, que abordan el objeto y el contenido de la obligación. Sin embargo, estos pasajes no siempre son claros y la jurisprudencia ha innovado dándole a la responsabilidad contractual un contenido que no se deriva de la simple lectura de los artículos del Código. Por lo demás, en la sección del Código Civil dedicada especialmente a los contratos, que corresponde a los artículos 1582 y siguientes, consagrados al contrato de compraventa, arrendamiento, mutuo, depósito y mandato en particular, existen diversas disposiciones que contemplan la responsabilidad del deudor, sin dejar de considerar además las leyes específicas relativas a contratos no tratados en el Código Civil. Se deduce que el contenido de la responsabilidad contractual es heterogéneo. No viene al caso estudiar en una obra que versa sobre las obligaciones contractuales en general, la responsabilidad del deudor propia a cada contrato, por ejemplo, como vendedor, arrendador, prestatario, mandatario, etc. Conviene precisar cuales son los principios generales de la responsabilidad contractual, debiendo ser la responsabilidad particular del deudor en virtud de tal o cual contrato analizada en un obra propia de contratos especiales.

La manera como el Código francés trata la responsabilidad contractual, no le es exclusiva y se repite en todos los códigos insertos en sistemas jurídicos que pertenecen a la misma familia que el derecho francés. Aun cuando las soluciones puedan ser diferentes, el Código suizo de las Obligaciones, en sus artículos 97 y siguientes, procede tal como el Código francés, debiendo completar sus disposiciones con aquellas referidas a contratos especiales. El Código Libanés de obligaciones y contratos (art. 252 y siguientes.) y el Código Civil de Luisiana (art. 1989 etc.) proceden de la misma

forma. Por lo demás, las disposiciones a este respecto no son necesariamente más claras que las del Código francés. Mención aparte merecen el Código Civil italiano y el Código Civil alemán. En efecto, ambos códigos no abordan específicamente el tema de la responsabilidad contractual. Si bien no la asimilan a la responsabilidad extracontractual, sólo consideran a la responsabilidad contractual en el marco de una violación de una obligación preexistente, recayendo sobre el deudor de manera específica, aun cuando la obligación no tenga un origen contractual<sup>5</sup>. Por ejemplo, la infracción de una obligación legal genera responsabilidad por el hecho de haber existido incumplimiento de una obligación. Esta responsabilidad emanada de la infracción de una obligación específica, se diferencia de la responsabilidad por hechos ilícitos, la cual corresponde en el derecho francés a la responsabilidad extracontractual, porque no supone el incumplimiento de una obligación específica, sino que simplemente una trasgresión a un deber general de cuidado. El método alemán y el Código italiano son interesantes en cuanto permiten asimilar a una infracción de una obligación contractual todos los casos de incumplimiento de una obligación que deba ser específicamente asumida por un deudor determinado, sea cual sea la fuente de dicha obligación. Al contrario, en los otros sistemas existe tendencia a desprender desde la responsabilidad delictual o extracontractual la infracción de una obligación específica que no se derive de ningún contrato o acto jurídico.

**5.- Los tres requisitos de la responsabilidad contractual.** El primer elemento necesario para que concurra la responsabilidad contractual radica en la existencia de un hecho imputable al deudor, quien ha incumplido o ha cumplido parcialmente con su obligación contractual. Sin embargo, como se trata de responsabilidad civil, y en consecuencia, de la reparación de un daño padecido por el acreedor debido al hecho del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto, es necesario que el daño tenga su origen en el hecho imputable al deudor. En consecuencia, paralelamente a este hecho, sólo existirá responsabilidad

---

<sup>5</sup> Cf. artículos 1176 y 1218 y s. del Código Civil Italiano y los § 241 y s. del B.G.B.

por parte del deudor si existe un daño y un vínculo causal, es decir, un vínculo de causa a efecto entre el hecho imputable al deudor y el daño. Tres elementos son entonces necesarios. Son elementos inherentes a la noción de responsabilidad civil.

#### **A. El hecho imputable al deudor contractual**

**6.- Incumplimiento del contrato y culpa.** Durante largo tiempo, tanto la doctrina de forma unánime como la jurisprudencia consideraron que la responsabilidad contractual sólo podía fundarse en la culpa. La mayoría de los autores modernos, tanto en Francia como en el extranjero, continúan analizando el hecho imputable del deudor contractual que incumple su obligación desde el ángulo de la culpa. En otras palabras, no existiría responsabilidad contractual sin culpa del deudor. La culpa sería un elemento constante en la responsabilidad contractual<sup>6</sup>.

Es cierto que el contenido de los códigos podía ser bastante bien interpretado en ese sentido. En el derecho francés, el artículo 1137 del Código Civil, relativo a la obligación de conservar una cosa, supone de forma evidente la culpa. Particularmente, el artículo 1147 del Código Civil, pasaje fundamental en materia de responsabilidad contractual, puede ser interpretado de manera de exigir la culpa como condición de la responsabilidad del deudor contractual. En efecto, fundándose en este artículo, se puede considerar que al incumplir la obligación generada por el contrato o al cumplirla tardíamente, se incurre en culpa, y que la prueba de una causa inimputable, esto es, un hecho no atribuible al deudor como causa del incumplimiento o retraso, tendría por objeto y efecto demostrar la

---

<sup>6</sup> Durante largo tiempo, la misma tendencia a hacer de la culpa una condición de la responsabilidad se pudo constatar en lo relativo a la responsabilidad extracontractual. Aunque hoy en día ciertos autores aun sostengan esta posición, la cual se resume en que no es posible concebir la responsabilidad civil separadamente de la culpa, cierto es que la responsabilidad extracontractual ha sido concebida desde fines del siglo XIX como una responsabilidad que no supone siempre la culpa de aquel que por fuera de todo contrato causó un daño a otro. A partir del segundo cuarto del siglo XX, la responsabilidad sin culpa u objetiva en materia extracontractual fue objeto de importantes avances en el derecho positivo francés.

ausencia de culpa. La mayoría de los autores franceses siguen teniendo hasta hoy esta concepción. Incluso del artículo 1147 del Código Civil se desprendería que no es el acreedor el responsable de demostrar la culpa del deudor, ya que ésta sería colegida del solo hecho del incumplimiento o del retraso en el cumplimiento. La prueba de una causa inimputable sería el medio para alterar la presunción de culpa. En efecto, si bien al incumplir la obligación contractual se incurre en culpa, esto no obsta a que existan causales de exoneración de la responsabilidad en virtud de las cuales, se podría llegar a admitir que el deudor no tuvo incidencia alguna en el incumplimiento de la obligación y que, en consecuencia, ya que el incumplimiento no le es imputable, no es posible derivar su responsabilidad. En resumen, dejando claro que la mala fe del deudor no es necesaria, el artículo 1147 hace suponer que la culpa involuntaria o leve es suficiente para comprometer la responsabilidad del sujeto, considerando a la mala fe como culpa dolosa, esto es, la voluntad o la conciencia de causar daño a otro al aceptar deliberadamente no cumplir con la obligación a la cual se encuentra obligado.

En la mayoría de los sistemas jurídicos extranjeros de tradición civilista, las disposiciones de los códigos se prestan para interpretaciones idénticas. Así, el B.G.B, salvo en hipótesis particulares en las cuales no se requiere la culpa<sup>7</sup>, contrapone la imposibilidad en el cumplimiento producto de una causa inimputable (§ 275), al incumplimiento culpable (§ 276, según el que el incumplimiento culpable se produce por culpa intencional o negligencia). El artículo 1218 del Código Civil italiano está redactado en términos similares al artículo 1147 del Código francés. Según el artículo 1994 del Código Civil de Luisiana, “un deudor es responsable de los daños causados por el incumplimiento de una obligación contractual”, y agrega que “la responsabilidad emana del incumplimiento propiamente tal, del cumplimiento imperfecto o del retraso en el cumplimiento”. En tanto, el artículo 97 del Código Federal suizo de las obligaciones anuncia que “cuando el acreedor no puede obtener el cumplimiento de la

---

<sup>7</sup> Por ejemplo, el § 279, relativo al incumplimiento de una obligación de entregar una cosa de género, que incluye obviamente el pago de una suma de dinero.

obligación, o bien puede obtenerlo pero sólo parcialmente, el deudor debe reparar el daño que resulte de esta situación, a menos que pruebe que no existe culpa de su parte". No se podría afirmar de forma más clara la necesidad de culpa, la cual se presume. El Código libanés de obligaciones y contratos podría desmarcarse de las legislaciones antes mencionadas, en cuanto a que si bien el artículo 254 confirma el principio de la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento, salvo prueba de un impedimento que suponga ausencia de culpa del deudor, el artículo 255 precisa que en ciertos casos excepcionales el incumplimiento no basta para implicar la responsabilidad del deudor, y que el acreedor debe probar que el incumplimiento se originó por culpa del deudor. En realidad, las disposiciones de este código, aun cuando no se haga mención expresa alguna, son perfectamente coherentes con el principio relativo a la distinción entre la responsabilidad contractual sin culpa y aquella que supone la culpa del deudor, que más allá de lo prescrito por la ley, ha sido consagrada por la jurisprudencia francesa.

**7.- Evolución del derecho francés desde el derecho antiguo.** No es del todo claro que la culpa del deudor sea siempre una condición de la responsabilidad en caso de incumplimiento. De la misma forma que la responsabilidad extracontractual evolucionó, y que la responsabilidad sin culpa u objetiva se impuso frente a la responsabilidad fundada en la culpa o subjetiva, se llegó a considerar que podía existir una responsabilidad contractual objetiva en paralelo a la responsabilidad subjetiva. Cuando el deudor contractual incumple o cumple imperfectamente su obligación, no solamente no es necesario que el acreedor pruebe en todos los casos la culpa del deudor, sino que aun más, la culpa podía incluso ser siempre presunta. Así sucede en los casos donde no se admite la prueba en contrario de la ausencia de culpa. En ese escenario, resulta inimaginable seguir fundando la responsabilidad en la culpa.

Es cierto que en el derecho francés antiguo se podía considerar a la responsabilidad contractual como subjetiva. La culpa no consistía simplemente en el hecho de incumplir la obligación. Suponía una apreciación del comportamiento del deudor para determinar si éste era culposo, y sólo cuando el hecho



que se encontraba al origen del incumplimiento tenía esta característica, el deudor era entonces responsable. A este respecto, se estableció en el derecho antiguo una gradación de culpas, partiendo desde la culpa más grave, la culpa intencional o dolosa, hasta la culpa menos grave, la culpa levísima (*culpa levissima*), culpa en la que no incurriría ni el deudor más diligente, pasando por la culpa grave (*culpa lata*) y la culpa leve (*culpa levis*), es decir, aquella negligencia que un deudor normalmente diligente no cometería. Según los contratos u obligaciones, variables dentro del mismo contrato, se exigía como condición de la responsabilidad contractual un grado de culpa de mayor o menor gravedad. El sistema era complejo, y sin duda alguna, salvo excepción, el Código Civil ya lo ha abandonado. Tanto en el artículo 1147 como en el 1137, el Código Civil transformó a la culpa en requisito de la responsabilidad contractual, siendo suficiente la culpa leve, que debe ser apreciada *in abstracto*, esto es, teniendo por referencia un modelo abstracto de deudor normalmente diligente, y no *in concreto*, tomando en cuenta las aptitudes particulares de tal o tal deudor. Incurrir en culpa no consiste en comportarse de tal o cual forma en virtud de las aptitudes personales de cada uno, sino que no comportarse como lo habría hecho un hombre razonable.

En consecuencia, contrariamente a las apariencias que se derivan de la lectura literal del artículo 1147 del Código Civil, para condenar al deudor a una indemnización de perjuicios no bastaba que el incumplimiento de la obligación fuera imputable a su actuar, sino que además se requería que fuera culpable. No obstante, mientras que en ciertos casos, la jurisprudencia, para condenar al deudor a indemnizar los perjuicios se fundaba en el simple hecho del incumplimiento, en otros exigía un juicio de valor sobre la conducta del deudor para considerar si aquella había sido o no culposa. Por lo tanto se podía considerar que existían dos formas de evaluación<sup>8</sup> y que todos los deudores contractuales no estaban sujetos al mismo régimen. Algunos autores lograron dilucidar esta dualidad de tratamiento. Se necesitaba explicar esta dualidad y no bastaba con afirmar que, por el simple hecho del incumplimiento

---

<sup>8</sup> N. del T: "*deux poids et deux mesures*"

de la obligación, se incurría en culpa ya que, por un lado, la prueba en contrario de la ausencia de culpa como causa del incumplimiento no siempre se admitía, cuestión que no cuadraba con la presunción de culpa, y por otro lado, el simple hecho del incumplimiento, en otros casos, no era suficiente para condenar al deudor a una indemnización de perjuicios, ya que se exigía además un comportamiento culposo, cuya prueba recaía en el acreedor.

Con el fin de explicar esta dualidad, Demogue formuló la distinción entre las obligaciones de resultado y las obligaciones de medios.

**8.- La distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado, y entre responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva.** Nos detuvimos anteriormente en la distinción entre obligaciones de medios, también llamadas obligaciones de diligencia, y obligaciones de resultado, también llamadas obligaciones determinadas. Se trata en efecto de una distinción que, si bien en sus orígenes fue esbozada para explicar la responsabilidad contractual, tiene también una aplicación general que no es exclusiva de las obligaciones contractuales<sup>9</sup>.

La distinción entre ambos tipos de obligaciones depende de su contenido. ¿Está el deudor obligado a procurar un resultado determinado para el acreedor, o bien simplemente, debe hacer todo lo que se puede esperar por parte de un deudor normalmente diligente para procurar la satisfacción del acreedor, sin estar por ello obligado a garantizarla?

En otras palabras, si la obligación es de resultado, del simple hecho de que dicho resultado no se obtenga, podremos suponer que las condiciones para establecer la responsabilidad del deudor están satisfechas, salvo prueba en contrario de una causa inimputable. En cambio, si la obligación es de

---

<sup>9</sup> N. del T: Conciernen también según el autor a las obligaciones reales, como por ejemplo la relativa al usufructuario, al dueño del predio sirviente o al propietario del fundo dominante, los que se sujetan a una obligación de medios. Asimismo, la obligación del gerente en la gestión de negocios es una obligación de medios y la obligación de pagar una suma de dinero, una de resultado.



medios, el deudor se compromete a procurar la satisfacción del acreedor, correspondiéndole a este último probar que el deudor no hizo lo esperable, lo que corresponde a la prueba de culpa. Ciertamente como veremos<sup>10</sup> la distinción entre ambas responsabilidades es más compleja, en virtud de que existen obligaciones de resultado más estrictas que otras, así como también sucede que algunas obligaciones de medios deben en ciertos casos combinarse con una presunción de culpa en contra del deudor. A pesar de las críticas, esta distinción corresponde a una realidad incontestable. En efecto, estas críticas dicen relación sobre todo con la dificultad de encontrar un criterio aceptable para distinguir entre ambas categorías de obligaciones, y no en cuanto al principio mismo de la distinción. Esta distinción tiene el gran mérito de explicar lo que podríamos haber considerado como una incoherencia en el derecho debido a la dualidad de regímenes aplicables a la responsabilidad contractual<sup>11</sup>. La distinción fue incorporada por la jurisprudencia al derecho positivo francés, y pudo ser retomada, tanto expresamente por las jurisprudencias extranjeras (por ejemplo, en el derecho belga), como por la doctrina, para darle coherencia a las soluciones esgrimidas en derecho positivo (por ejemplo en Italia). Los principios de Unidroit aplicables a los contratos de comercio internacional consagran expresamente la distinción (art. 5.1.4).

En un principio, la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado tenía simplemente por objeto explicar las diferencias en el trato aplicado al deudor contractual, al cual se le consideraba responsable sólo cuando había incurrido en culpa, sin importar si la obligación fuera de medios o de resultado. Si la obligación es de resultado, la culpa consiste en no procurar el resultado prometido, siempre y cuando el daño sea imputable a la conducta del deudor. En otras palabras, el incumplimiento de una obligación de resultado, imputable a la conducta del deudor, es lo que constituye la culpa. Al contrario, tratándose de una obligación de medios, el simple hecho del incumplimiento, es

---

<sup>10</sup> V *infra*, n° 17, 18 y 27.

<sup>11</sup> V *supra*, n° 7.

decir, la no satisfacción del acreedor, es insuficiente para deducir la culpa del deudor. Se requiere que el acreedor pruebe que el deudor no hizo todo lo que podía esperarse de un deudor diligente. En consecuencia, en ambos casos la responsabilidad del deudor se funda en la culpa. En realidad, podríamos preguntarnos si la distinción entre ambas obligaciones no corresponde más bien a la distinción entre responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. La respuesta a esta interrogante debe ser afirmativa.

**9.- Ausencia de culpa y causa inimputable.** La mayoría de los autores franceses actuales todavía emplea la distinción entre ambos tipos de obligaciones para explicar las diferencias de regímenes de una responsabilidad contractual que seguiría fundándose en la culpa del deudor. Diversos fallos de la Corte de Casación han sido dictados en el mismo sentido (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de febrero de 1988, *Bull. Civ.* 1, n° 42, *J.C.P.* 1988.IV 156, *Rev. trim. dr. civ.* 1988.767, obs. Jourdain y Civ. 1<sup>ra</sup> 8 de diciembre de 1998, *D.A.* 1999.123, *R.J.D.A.* 1999, n° 164, que considera que la obligación de resultado implica una presunción de culpa; Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de febrero de 1994, *J.C.P.* 1994.II.22294, nota Delebecque, *Contrats, conc. consomm.* 1994, n° 70, obs. Leveneur, *Rev. trim. dr. civ.* 1994.613, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 20 de junio de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.2010; Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de octubre de 1997, *D.A.* 1997.1419, *R.J.D.A.* 1998, n° 47. V. también, Com. 14 de enero de 1997, *R.J.D.A.* 1997, n° 642, fallo según el cual la culpa de un mandatario en el cumplimiento de un mandato radicaba en el incumplimiento de la obligación de resultado relativa a exigir la entrega de un documento).

La culpa supone la realización de un juicio de valor sobre el comportamiento de un deudor para determinar si actuó bien o mal. Si la obligación es de medios, resulta evidente que se actúa de dicha forma y que la responsabilidad del deudor no puede sino ser una responsabilidad subjetiva. Pero la situación es diferente si la obligación es de resultado. En este caso, no se realiza ningún juicio sobre el comportamiento del deudor. No es posible efectuar tal juicio, ya que se entiende responsable desde que el resultado al cual estaba comprometido no es obtenido, sin poder demostrar si actuó diligentemente, o

si hizo todo lo posible para lograrlo. Debido a que no es posible juzgar la conducta del deudor, no se puede fundar en la culpa la responsabilidad por el incumplimiento de una obligación de resultado. El incumplimiento de una obligación de ese tipo conlleva a una responsabilidad sin culpa u objetiva (cf. en relación con un contrato de arrendamiento de obra, Com. 17 de noviembre de 1993, *R.J.D.A.*, n° 310). Ciertamente es que no necesariamente el incumplimiento de una obligación de resultado genera en todos los casos una responsabilidad ineluctable<sup>12</sup>. En efecto, el deudor podrá eximirse de la responsabilidad que normalmente se le hubiera atribuido, si logra probar la concurrencia de una causa inimputable (cf. Art. 1147 del Código Civil)<sup>13</sup>. Pero, si bien es cierto que cuando frente a la hipótesis de un daño causado por una causa inimputable, es decir, un hecho que originó el daño no atribuible al deudor, concurre la mayoría de las veces también ausencia de culpa, esto no significa necesariamente que la prueba de una causa inimputable equivalga lógicamente a la prueba de la ausencia de culpa. La prueba tanto de la ausencia de culpa como la de la culpa, supone la realización de un juicio sobre la conducta del deudor contractual. Al contrario, la prueba de una causa inimputable prescinde de todo juicio sobre la conducta del deudor. No se trata de considerar que, probando la existencia de una causa inimputable el deudor no haya incurrido en culpa, sino que radica en admitir que el comportamiento del deudor, sea o no culpable, no es causa del daño padecido por el acreedor. En otras palabras, la prueba de una causa inimputable no

---

<sup>12</sup> La responsabilidad sí puede en ciertas situaciones ser ineluctable, especialmente cuando consiste en la obligación de dar una cosa de género, v. *infra*, n° 17.

<sup>13</sup> Una cosa es considerar que la responsabilidad no se basa en la culpa, y que incluso el incumplimiento no culposo obliga a reparar el daño causado. Otra cosa muy distinta es exigir la imputabilidad del daño al hecho del deudor. En todos los casos, incluso cuando la responsabilidad no recae en la culpa, el incumplimiento de la obligación debe ser imputable al hecho del deudor, pudiendo este último eximirse de la reparación en caso de que una causa inimputable haya provocado el daño. Es la razón por la cual resulta injustificable la resolución adoptada en un fallo de la Sala Comercial de la Corte de Casación de fecha 30 de junio de 1992 (*R.J.D.A.* 1993, n° 202, *D.* 1994.454, obs. Bénabent) el que después de haber citado el principio del cumplimiento por equivalencia enunciado en el art. 1142 del Código Civil, sentencia que el deudor está obligado a reparar el daño aun sin haber incurrido en culpa, siendo que el incumplimiento de la obligación no le era imputable, debido a que fue provocado por un hecho del príncipe, lo que corresponde a una causa inimputable. Asimismo, resulta insostenible la posición de ciertos fallos en la medida que afirman la identidad entre ausencia de culpa y fuerza mayor (cf. Caen 3 de octubre 2000, *J.C.P.* 2001.IV.2284).

implica sino un problema de causalidad. La causa inimputable rompe el vínculo de causalidad, el cual, en el caso de un incumplimiento de una obligación de resultado, se presume entre el actuar del deudor y el daño padecido por el acreedor a causa del incumplimiento. Todas las responsabilidades objetivas, tanto en materia contractual como en extracontractual, son obligaciones de reparación que se fundan únicamente en el vínculo existente entre el actuar de una persona y el daño sufrido por otra. Es por ello que se habla de ellas como responsabilidades causales, lo que deja en claro que la causalidad no debe ser examinada bajo el ángulo de la culpa. La causalidad es fundamento suficiente para fundar la responsabilidad. La responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligación de resultado se trata precisamente de esto.

Por lo demás, el incumplimiento de una obligación, aun siendo imputable al deudor, no constituiría en sí mismo culpa. La culpa se derivará del juicio realizado sobre el comportamiento del deudor. En ciertos casos, este juicio deberá realizarse. En otros, por tratarse de responsabilidad objetiva, no será necesario.

Tratándose de responsabilidad objetiva, la única manera de eximirse es probando una causa inimputable. Sin embargo, las causas extrañas también tienen cabida en la responsabilidad subjetiva, debido a que el deudor podrá siempre demostrar que la culpa en que incurrió y que ha sido demostrada por el acreedor, no ha sido la causa del daño sufrido por él.

#### **10.- Consecuencias del principio de la distinción entre ambos tipos de obligaciones.**

Habiendo determinado el principio de la distinción entre obligaciones de resultado y de medios, como la naturaleza de la responsabilidad del deudor contractual, conviene examinar no sólo el régimen de la responsabilidad en caso de incumplimiento de una obligación del primer o segundo tipo, sino que también el criterio de distinción entre ambos tipos de obligaciones. No obstante lo anterior, puede suceder que las partes hayan acordado convencionalmente, a través de cláusulas conformes a cada

contrato, la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento o de cumplimiento imperfecto, lo que tiene por efecto modificar el régimen de la responsabilidad respecto a lo que pudo haber sido, sin considerar además que la responsabilidad puede ser incluso excluida en caso de incumplimiento.

1) *El régimen de la responsabilidad contractual y la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado*<sup>14</sup>

**11.- Régímenes de derecho común y de excepción referente a las responsabilidades subjetivas y objetivas.** Para la mayoría de los autores, el interés en la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en cuanto al régimen de responsabilidad del deudor radicaría en quién recae la carga de la prueba de la culpa, así como la prueba en contrario de la ausencia de culpa. Si la obligación es de resultado, la culpa del deudor sería presunta y sólo se podría alterar dicha presunción probando la existencia de una causa inimputable. Si la obligación es de medios, le compete por regla general al acreedor probar la culpa del deudor, salvo en ciertos casos, en que es posible admitir culpa presunta,

---

<sup>14</sup> *Bibliografía:* Frossard, *La distinction des obligations de moyens et de résultat*, 1965; Esmein, Remarques sur de nouvelles classifications des obligations, *Mélanges Capitant*, p. 235; Esmein, Obligation et responsabilité contractuelle, *Mélanges Ripert*, t. 2, p. 101; Marton, Obligations de résultat et obligations de moyen, *Rev. trim. dr. civ.* 1935.499; Tunc, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, *Rev. trim. dr. civ.* 1945.235; Rodiere, Une notion menacée, la faute ordinaire dans les contrats, *Rev. trim. dr. civ.* 1945.201; Tunc, La distinction des obligations de moyens et de résultat, *J.C.P.* 1945.1.449; Mazeaud, L'obligation générale de prudence et de diligence et les obligations déterminées, *Rev. trim. dr. civ.* 1936.1; Plancqueel, Obligations de moyens, obligations de résultat, *Rev. trim. dr. civ.* 1972.334; Constaninesco, *Inexécution et faute contractuelle en droit comparé*, 1960; Bergel, La responsabilité des hôteliers, *Gaz. Pal.* 1977.1.1).62; Rodiere, *Droit des transports*, 2<sup>da</sup> ed. 1977; Crepeau, *L'intensité de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie*, Montréal, 1989; Lafforgue, La sécurité des biens du client du restaurateur, *J.C.P.* 1993, ed. E. 1304; Desrayaud, École de l'exégèse et interprétations doctrinales de l'article 1137 du Code civil, *Rev. trim. dr. civ.* 1993. 535; Viney, La responsabilité contractuelle du fait des choses : un avenir incertain, *J.C.P.* 1996.I.3944, n° 6 y s.; Viney, La responsabilité contractuelle du fait d'autrui, *J.C.P.* 1996.I.3944, n° 16 y s.; Jourdain, Responsabilité contractuelle du fait des choses: la Cour de cassation aurait-elle des regrets?, *Rev. trim. dr. civ.* 1996.632 ; Hassler, Le point sur l'obligation de sécurité. *Petites Affiches* 12 février 1997; *L'indemnisation des accidents médicaux*, Trabajos del coloquio del 24 de abril de 1997; martineau-bourguinaud, L'obligation contractuelle de surveillance, *Petites Affiches* 3 mai 2001; Servant, L'extrême rapidité des revirements de jurisprudence en matière de responsabilité hôtelière, *D.* 2001. Chron. 2914; Bellisent, *Contribution à l'analyse de la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat*, 2003.

siendo susceptible de ser alterada, ya no por la prueba de una causa inimputable, sino que probando un comportamiento diligente por parte del deudor. Como vimos anteriormente<sup>15</sup>, resulta discutible esta manera de considerar los diferentes regímenes de responsabilidad contractual, sin considerar que no vemos porqué, respecto a la prueba de la ausencia de culpa, se exija en ciertos casos una prueba positiva de una causa inimputable, siendo que en otros, bastaría con la prueba negativa consistente en que el deudor no ha incurrido en culpa en virtud de un comportamiento diligente. Esto prueba, una vez más, que la obligación de resultado cuando es incumplida, se sanciona como responsabilidad objetiva, en tanto que el incumplimiento de una obligación de medios es sancionado como responsabilidad subjetiva.

A pesar de lo anterior, el régimen de responsabilidad para ambos tipos de obligaciones, no siempre es el mismo. Paralelo a un régimen que podríamos tildar de derecho común, existe un régimen de excepción.

a) Obligaciones de resultado

α) Régimen normal

**12.- Derecho común: prueba de una causa inimputable.** En el derecho común, la jurisprudencia en lo referente a la obligación de resultado se guía por el artículo 1147 del Código Civil, es decir, que la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento de la obligación no será admitida si logra probar que el daño se debe a una causa inimputable (cf. Civil 1<sup>ra</sup>, 28 de febrero de 1995, *R.J.D.A.* 1995, n° 542. El fallo considera que sólo la prueba de una causa inimputable permite eximir de responsabilidad al deudor de una obligación de resultado; Civ. 1<sup>ra</sup>, 10 de junio de 1996, *Bull. civ.* 1, n° 317, *J.C.P.* 1996.IV.2117, *Rep. not.* 1997.337, obs. Delebecque, fallo según el que sólo la prueba de una causa inimputable puede exonerar de responsabilidad al vendedor que no entregó la cosa en conformidad a lo pactado; Com. 19 de

---

<sup>15</sup> V *supra*, n° 9.



diciembre 2000, *R.J.D.A.* 2001, n° 617, que enuncia el principio de la responsabilidad del deudor de una obligación de adquirir, salvo prueba de una causa inimputable). Se trata de la prueba positiva de un acontecimiento no atribuible al actuar del deudor que ocasiona el incumplimiento de la obligación. En efecto, hay tres tipos de causas inimputables, la fuerza mayor, el hecho de un tercero y el hecho de la víctima que, en el caso, corresponde al acreedor de la obligación incumplida. Se producirá la exoneración total de la responsabilidad del deudor sólo en el caso que estos hechos constituyan la única causa del daño sufrido por el acreedor. En caso de que estos hechos se combinen con el actuar incluso no culpable del deudor, no podría sino existir una exoneración parcial de la responsabilidad. Si se trata del hecho de la víctima, la exoneración parcial de la responsabilidad del deudor se manifestará en una reducción de la indemnización de perjuicios que beneficia al acreedor, produciéndose por tanto una distribución de la responsabilidad. Si el daño es causado parcialmente por el hecho o la culpa de un tercero, la jurisprudencia no admite la exoneración parcial de responsabilidad del deudor contractual, ya que considera que cada uno de los co-responsables de un daño está obligado a la reparación del daño en su integridad, dejando a salvo el derecho a repetir que tiene aquel que actuó en contra del otro responsable. Se trata del principio de la obligación *in solidum* de los co-responsables, el cual se admite tanto en materia contractual como extracontractual. En cuanto a la fuerza mayor, debido a los requisitos que supone para ser admitida, no puede sino dar lugar a una exoneración total de la responsabilidad del deudor.

Uno de los objetivos esenciales de la obligación de resultado consiste en permitir presumir que el daño sufrido por el acreedor se debe al actuar del deudor. En otras palabras, el acreedor no debe probar que a partir del hecho del deudor se derivó el daño, lo que implica que es el deudor quien asume todos los casos dudosos, aquellos en que no aparezca de forma clara que son ajenos a su actuar. Una vez que el acreedor ha probado que la obligación no se cumplió,

en virtud de no haber obtenido satisfacción, este incumplimiento se presume imputable al hecho del deudor. Se trata de una presunción de causalidad. (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de febrero de 1988, *J.C.P.* 1988.IV.156, *Bull. civ.* 1, n° 42, *Rev. trim. dr. civ.* 1988.767, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 5 de marzo de 1991, *Rev. trim. dr. civ.* 1991.756, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de febrero de 1994, *D.* 1994.IR.55; Civ. 1<sup>ra</sup>, 20 de junio de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.2010). Esta presunción se funda en el principio según el cual el deudor, para exonerarse de su responsabilidad, debe demostrar que concurre una causa inimputable<sup>16</sup>. En efecto, con esta prueba, el deudor demuestra que el daño ocasionado no es imputable a su actividad. En consecuencia, ya que la prueba de una causa inimputable tiene precisamente por objeto desvincular el daño del hecho del deudor, es que el incumplimiento de la obligación permite pensar que le es imputable. En resumen, probar la existencia de una causa inimputable es alterar la presunción de causalidad. La jurisprudencia está férreamente de acuerdo al respecto. Así, en lo que se refiere al contrato de transporte terrestre de personas, el transportista está sujeto a una obligación de seguridad respecto de la integridad corporal del pasajero, y el incumplimiento se presume imputable a su actuar, siendo sólo posible eximirse probando una causa inimputable (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 27 de abril de 1976, *J.C.P.* 1976.II.18477, nota Rodière, *Rev. trim. dr. civ.* 1977.139, obs. Durry; París 30 de noviembre de 1994, *R.J.D.A.* 1995, n° 252). Esta obligación es estricta, tanto así que, aunque del hecho del transportista no se presuma la culpa, la jurisprudencia relaciona el incumplimiento de la obligación a su actuar

---

<sup>16</sup> En una época reciente se llegó a pensar que la Corte de Casación habría proscrito esta presunción de causalidad. En efecto, la Primera Sala Civil, en un fallo del 16 de octubre de 2001, *Contrats, conc. consomm.* 2002, n° 25, obs. Leveneur, *Rev. trim. dr. civ.* 2002.514, obs. Jourdain, a propósito de una explosión de gas proveniente de un aparato que utilizaba dicho combustible, admitió que era la víctima quien debía probar que la explosión “tuvo su origen en la prestación realizada por el vendedor-instalador” del aparato. Si bien esta decisión es susceptible de interpretaciones diversas, no podemos por ello afirmar que se abandona la presunción de causalidad. Sobre todo porque la Corte de Casación pudo haberse inspirado en una directiva europea en materia de responsabilidad por el hecho de productos defectuosos, que se introdujo en el derecho francés a través de la ley del 19 de mayo de 1998 (art. 1386-1 y s. C. civ.). Sin embargo, en virtud de ese texto, la causalidad debe probarse (art. 1386-9 C. civ.), cuestión que no se condice con el derecho común francés relativo a la obligación de resultado.

incluso en hipótesis en que pudo haberse pensado lo contrario. Así, en el caso en que un pasajero de un tren resultó lesionado por una piedra proveniente del exterior que irrumpió en el vagón a través de la ventana entreabierta, la responsabilidad del transportista fue admitida, en virtud de que “ninguna certeza pudo ser aportada respecto al origen de la proyección de la piedra”, y por lo tanto, no se aportaba prueba suficiente para poder concluir que el accidente se debía a una causa inimputable (Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de noviembre de 1960, *D.* 1961.75. V. también Civ. 1<sup>ra</sup>, 26 de junio de 1990, *D.* 1990.IR.193. Adde, Montpellier 9 de julio de 1997, *J.C.P.* 1998.IV.1286, respecto a un pasajero que cayó de su camarote, fallo en el que los hechos no fueron contestados y la S.N.C.F no probó la existencia de culpa de la víctima, circunstancia que le hubiese permitido exonerarse de responsabilidad).

Todo bien considerado, la obligación de resultado del transportista no es más estricta que la que pesa sobre otros deudores. De esta forma debe vincularse la actividad del dueño de un establecimiento comercial con el daño padecido por un cliente que sufrió lesiones producto de la explosión de una botella de limonada recién sacada de un estante, debido a que, por un lado “el dueño debe tener a disposición de sus clientes artículos que no presenten más riesgos que los que puedan derivarse de su naturaleza” y que, por otro lado, no justificó la concurrencia de una causa inimputable (Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de junio de 1980, *D.* 1980.IR.48, *J.C.P.* 1980.II.19422, nota Dejean de la Batie, rechazando el recurso en contra Burdeos 5 de enero de 1978, *D.* 1979.IR.61, obs. Larroumet). Asimismo, el instalador de la calefacción en un conjunto inmobiliario sólo podrá exonerarse de su responsabilidad en contra del jefe de obra probando la existencia de una causa inimputable (Com. 17 de noviembre de 1992, *R.J.D.A.* 1993, n° 310). De la misma forma, un centro de transfusión sanguínea sólo podrá eximirse de su responsabilidad en caso de una anomalía en la sangre, ocasionada por una causa inimputable, no pudiendo consistir el vicio mismo en una causa inimputable (Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de abril de 1995, *D.* 1995.IR.130 y 131, *J.C.P.*

1995.II.22467, nota Jourdain), mientras que la obligación en una clínica ofreciendo el mismo suministro es una obligación de medios (Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de abril de 1995, *D.* 1995.IR.130 y 131, *J.C.P.* 1995.II.22467, nota Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 14 de noviembre de 1995, *D.* 1995.IR.269, *J.C.P.* 1996.IV.18. V. Leveneur, Sida postransfusionnel et responsabilité: obligation de résultat ou de moyens pour les fournisseurs de sang, *Contrats, conc. consomm.* 1995, Chron. 9. Comparar, *Riom* 6 de abril de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.2601, que admite la existencia de una obligación de resultado en contra de la clínica). El arrendador es responsable de las perturbaciones al goce provocadas por otros locatarios salvo prueba de una causa inimputable (Civ. 3<sup>ra</sup>, 19 de mayo de 2004, *D.* 2004.IR.1640) así como, de la misma forma, es responsable de la imposibilidad de entregar el inmueble al arrendador en razón de la ocupación ilícita de un tercero (Civ. 3<sup>ra</sup>, 28 de septiembre de 2005, n° 1321).

**13.- Aplicaciones - Código Civil.** Las aplicaciones del principio de responsabilidad objetiva en virtud del cual el deudor que incumple una obligación de resultado sólo puede eximirse probando una causa inimputable, son numerosas tanto en sede legal como jurisprudencial.

Una de las aplicaciones más destacables que el Código Civil consiste en la responsabilidad de los constructores en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento de obra en materia inmobiliaria. En efecto, según el artículo 1792, todo constructor<sup>17</sup> es “responsable de pleno derecho” en caso de generarse daños por las circunstancias establecidas en el texto, salvo si prueba la concurrencia de una causa inimputable. Este texto no se limita sólo a establecer una presunción de culpa en contra de los constructores, sino que hace recaer sobre ellos una responsabilidad objetiva (cf. por ejemplo, Civ. 3<sup>ra</sup>, 25 de enero de 1989, *D.* 1989.IR.43, *J.C.P.* 1989.IV.112. *Bull. civ.* 3, n° 18, *Rep. not.* 1990.761, obs. Souleau). Lo anterior no se deduce a partir de

---

<sup>17</sup> Conviene asimilar al constructor las personas enumeradas en los artículos 1792-1 y 1792-4

una interpretación del texto, como sucede respecto al artículo 1147, sino que en virtud de sus normas expresas. En efecto, el artículo 1792 enuncia el principio de una responsabilidad de pleno derecho. De lo cual se deduce que la responsabilidad de pleno derecho no es otra cosa que una responsabilidad sin culpa, es decir, una responsabilidad objetiva. De seguir existiendo dudas respecto a si el incumplimiento de una obligación de resultado se sanciona por una responsabilidad objetiva, el artículo 1792 del Código Civil lograría disiparlas definitivamente<sup>18</sup>.

Otra aplicación de la responsabilidad de pleno derecho u objetiva en contra de un deudor contractual se deduce del artículo 1953 del Código Civil, relativo a la responsabilidad que le compete al hotelero por los objetos que el cliente ingresa al hotel. En efecto, en virtud de este artículo, se admite que el hotelero responde por los daños ocasionados a los objetos incluso sin haber incurrido en culpa, y se exime probando la concurrencia de una causa inimputable, no calificando en esta hipótesis el robo mismo. En consecuencia, el hotelero está sujeto a una obligación de resultado en cuanto a la conservación de los bienes de su cliente<sup>19</sup>, sin importar si éstos le fueron directamente confiados o fueron dejados por los clientes en lugares adecuados del hotel, tal como lo sería el dormitorio puesto a su disposición. Mientras que en el segundo caso, la responsabilidad está limitada por un tope (art.1953, inc. 3), en el primero, es ilimitada (art. 1953, inc. 2). Si bien es cierto que, al contrario del artículo 1792,

---

<sup>18</sup> Sin embargo, cuando las condiciones exigidas por el artículo 1792 para admitir la responsabilidad de pleno derecho del constructor no son satisfechas, se reconoce que existe la posibilidad eventual de una responsabilidad fundada en la culpa, culpa que debe ser probada por el acreedor (cf. Civ. 3<sup>ra</sup>, 9 de marzo de 1988, *J.C.P.* 1988.IV.183), con la condición de que no se trate de un daño o una anomalía que fueron objeto de reserva a la hora de la recepción de la obra, ya que en tal situación, el constructor estaría obligado a reparar el daño, en razón de haber incumplido una obligación de resultado, obligación distinta a la establecida en el artículo 1792, de donde se deduce que sólo podrá exonerarse de su responsabilidad probando una causa inimputable (cf. Civ. 3<sup>ra</sup>, 13 de abril de 1988, *J.C.P.* 1988.IV.209). La responsabilidad de un arrendador de obra por el retraso en la ejecución de los trabajos es totalmente independiente del artículo 1792 y sólo puede fundarse en la culpa (cf. Civ. 3<sup>ra</sup>, 31 de mayo de 1989, *J.C.P.* 1989.IV.283, fallo según el que, en caso de retraso en un contrato de arrendamiento de obra y no habiéndose estipulado una cláusula penal, el arquitecto sólo puede estar obligado a una reparación en beneficio del dueño de la obra si éste prueba que incurrió en culpa).

<sup>19</sup> En esta medida, la responsabilidad del hotelero relativa a la obligación de custodia, esto es, actuando como depositario, difiere de la responsabilidad de derecho común del depositario, quien a diferencia del hotelero, no está sujeto a una obligación de resultado, sino que a una obligación de medios, v. *infra*, n° 21 y 27.

el artículo 1953 no establece en ningún caso que la responsabilidad del hotelero sea una responsabilidad de pleno derecho, esto se deduce, no obstante, necesariamente del inciso 3º del artículo 1953. En efecto, según esta norma, cuando la culpa del hotelero en la conservación de los bienes ingresados por el cliente se logra probar, la responsabilidad es ilimitada, incluso en lo que concierne a los bienes no especialmente confiados al hotelero, en consecuencia, aquellos que dejaría por ejemplo en su dormitorio (cf. Aix-en-Provence 17 de diciembre de 1996, *J.C.P.* 1997.IV.2307). En otras palabras, en paralelo a una responsabilidad ilimitada del hotelero fundada en la culpa, existe una responsabilidad que no supone culpa, circunscrita por ley a un tope. Cuando el cliente del hotel confía sus bienes al deudor, estamos ante una responsabilidad de pleno derecho e ilimitada. ¿Podríamos sostener que se trataría simplemente de una responsabilidad fundada en una presunción de culpa? Esto sería discutible, no sólo porque el hotelero está impedido de eximirse de su obligación de reparación probando ausencia de culpa, sino sólo probando la concurrencia de una causa inimputable, esto es, destruyendo en efecto la presunción del vínculo de causalidad entre su actuar y el daño, sino que también porque no puede exonerarse de responsabilidad en caso de robo, siendo que el robo permite excluir la culpa. Por lo demás, la Corte de Casación parece distinguir correctamente entre la responsabilidad por culpa y la responsabilidad de pleno derecho del hotelero (cf. Civ. 1ª, 27 de enero de 1982, *D.* 1982.IR.179, *J.C.P.* 1983.II.19936, nota Chabas)<sup>20</sup>. La responsabilidad establecida en el artículo 1953 del Código Civil se

---

<sup>20</sup> Independiente de la responsabilidad que resulta de la custodia de objetos que le son confiados o son dejados por el cliente en el dormitorio, el hotelero es responsable no sólo cuando el cliente sufre un atentado respecto a los bienes que lleva consigo, bienes que no han sido confiados al hotelero ni dejados en el hotel (cf. Civ. 1ª, 27 de enero de 1982, *Bull. civ.* 1.49, *D.* 1982.IR.359, obs. Larroumet), sino que también cuando el cliente sufre un atentado que afecte su seguridad corporal (cf. Civ. 1ª, 29 de enero de 1985, *J.C.P.* 1985.IV.138, 19 de julio de 1983, *J.C.P.* 1983.IV.317, *Rev. trim. dr. civ.* 1984.729, obs. Huet; París, 20 de marzo de 1987, *D.* 1987.IR.101. En el mismo sentido, en lo que compete a un club de veraneo, Civ. 1ª, 25 de mayo de 1987, *D.* 1987.IR.144, o al dueño de un restaurante, Civ. 1ª, 14 de marzo de 1995, *D.* 1995.IR.90; París 7 de marzo de 1997, *D.* 1998.7, nota Dagorne-Labbé. V. también, París 10 de septiembre de 2001, *D.* 2001.IR.2875, en el caso de una manicurista en que la clienta se había quitado sus joyas, se admitió que existía responsabilidad sin culpa por parte de la manicurista, pero la Corte de Casación lo revocó (Civ. 1ª, 8 de febrero de 2005, *D.* 2005.IR.522), toda vez que, contrariamente al hotelero, no existe depósito necesario y por tanto no habría obligación de guarda. Mientras que la



extendió respecto a los estacionamientos de vehículos en las dependencias del hotel (Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de septiembre de 2004, *J.C.P.* 2004.IV.3101).

Si bien la Corte de Casación había admitido una responsabilidad por culpa en contra de los establecimientos hospitalarios en lo que concierne a los objetos ingresados por los pacientes al interior del recinto, (Civ. 1<sup>ra</sup>, 19 de mayo de 1992, *R.J.D.A.* 1992, n° 685, *D.* 1993. Somm. 213, obs. Fortis), el legislador se inspiró en el sistema del artículo 1953 del Código Civil, adaptándolo a los particularismos de la hospitalización (ley del 6 de julio de 1992).

Según el artículo 1733 del Código Civil, el arrendatario es responsable del incendio del inmueble arrendado, salvo si prueba que el incendio se debió a fuerza mayor, a un vicio de construcción o bien se propagó desde un inmueble vecino. La prueba de la ausencia de culpa del arrendatario no tiene cabida. Tanto así que la jurisprudencia considera al artículo 1733 como la fuente de una “presunción de responsabilidad” (cf. especialmente, Civ. 3<sup>ra</sup>, 9 de febrero de 1977, *D.* 1977.IR.233, Civ. 3<sup>ra</sup>, 24 de abril de 1981, *Bull. civ.* 3, n° 81). La expresión presunción de responsabilidad es utilizada por la jurisprudencia como sinónimo de responsabilidad de pleno derecho o de responsabilidad objetiva<sup>21</sup>. En consecuencia, podemos concebir perfectamente que el arrendatario, subordinado a la obligación de resultado relativa a no provocar incendios en el inmueble arrendado, sólo pueda eximirse de su

---

obligación del hotelero es de resultado, las obligaciones restantes son sólo de medios (Civ. 1<sup>ra</sup>, 22 de mayo de 1991, *D.* 1991.IR.171, *Rev. trim. dr. civ.* 1991.757, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de febrero de 2005, *D.* 2005.2058, nota Corgas-Bernard. V. al respecto, Drapier y Mercoli, De la sécurité dans le contrat d'hôtellerie, *Petites Affiches* 4 de agosto de 2006). Un mismo contrato puede hacer nacer obligaciones de diferente naturaleza. La Corte de Casación admitió que el dueño de un establecimiento termal está sujeto a una obligación de resultado cuando a raíz del incendio del establecimiento, tuvo que interrumpir un tratamiento, caso en el que sólo puede exonerarse de la responsabilidad si prueba la existencia de una causa inimputable, no estando involucrada la obligación de seguridad (Civ. 1<sup>ra</sup>, 28 de febrero de 1995, *D.* 1995.IR.90). No existen razones para negar el mismo criterio en lo que compete a los hoteleros.

<sup>21</sup> La expresión presunción de responsabilidad no es acertada. Es preferible hablar de responsabilidad sin culpa, de responsabilidad objetiva o bien de responsabilidad de pleno derecho. En efecto, lo que podemos presumir son más bien las condiciones de la responsabilidad (por ejemplo, la presunción de causalidad), pero no la responsabilidad misma. La responsabilidad se admitirá si sus presupuestos, eventualmente presuntos, son satisfechos. No lo será si una de sus condiciones falta o es alterada (por ejemplo, la alteración de la presunción de causalidad).

responsabilidad invocando indicios que permitan atribuir el siniestro a causas que no le serían imputables, siempre y cuando estos indicios correspondan a una prueba directa y positiva de uno de los hechos eximentes restrictivamente previstos en el artículo 1733 (cf. Orleáns, 30 de octubre de 1975, *J.C.P.* 1976.IV.364). Desde el momento en que una causa inimputable no es probada efectivamente, el advenimiento del siniestro se vincula automáticamente con el actuar del deudor, excluyendo claramente la posibilidad de probar la ausencia de culpa<sup>22</sup>.

En virtud de una ley del 19 de mayo de 1998, se introdujeron al Código Civil los artículos 1386-1 y siguientes<sup>23</sup>. Estas normas se refieren a la responsabilidad por los daños ocasionados por productos defectuosos. Así, tanto el legislador francés como el legislador europeo lograron unificar los regímenes de reparación aplicables a acreedores contractuales y a terceros (art. 1386-1 C. Civ). Ya no es necesario, para admitir la responsabilidad del productor, homologar a un defecto intrínseco de un producto la figura del vicio oculto situado en los artículos 1641 y siguientes. En realidad, a partir del artículo 1386-4 del Código Civil podemos deducir que el productor está sujeto a una obligación de seguridad ya que establece que “un producto es defectuoso en la medida que no ofrece la seguridad que podríamos legítimamente esperar”, siendo el defecto del producto una infracción a dicha obligación. Esta obligación consiste sin lugar a dudas en una obligación de resultado. Esto se deduce esencialmente del artículo 1386-11, inciso 1ro. del Código Civil, que precisa que se trata de una responsabilidad de pleno derecho, y a través de las causas de exoneración previstas en otras disposiciones. Los artículos 1386-1 y siguientes del Código Civil constituyen una de las consagraciones más notables de la obligación de resultado en el derecho actual<sup>24</sup>. Sin embargo, aunque así sucede por regla general, es

---

<sup>22</sup> V. *supra*, n° 12.

<sup>23</sup> La ley del 19 de mayo de 1998, tiene por objetivo adaptar al derecho francés la instrucción europea que ordena la armonización de las legislaciones de los Estados miembros (instrucción del 25 de julio de 1985).

<sup>24</sup> Antes de la ley del 19 de mayo de 1998, la responsabilidad de los productores no era desconocida para el derecho francés. No obstante, ella estaba fundada en otros textos, y además el régimen no era el mismo según si se trataba de responsabilidad contractual o extracontractual. En materia contractual, la

necesario tener en cuenta el hecho de que, en ciertos casos, el defecto, que debe ser probado por la víctima, se debe a culpa (por ejemplo, cuando se trata de un defecto en la fabricación o en la concepción).

**14.- Jurisprudencia. Transporte y Contratos análogos.** En numerosas situaciones, la jurisprudencia, sin basarse en texto legal alguno, ha impuesto al deudor contractual una obligación de resultado cuyo incumplimiento genera una presunción de causalidad y responsabilidad objetiva del deudor, de la cual sólo puede eximirse probando la concurrencia de una causa inimputable.

Se trata en primer lugar del reconocido ejemplo relativo al contrato de transporte. A partir de un fallo emblemático del 21 de abril de 1913 (D.P 1913.1.249, nota Sarrut, S.1914.1.5, nota Lyon-Caen), la Corte de Casación hace recaer sobre el transportista de personas la obligación de resultado relativa a transportar al pasajero sano y salvo a su destino (cf. 1<sup>ra</sup>, 3 de julio de 2002, D. 2002.IR.2306, según el cual la agresión a un pasajero en un tren no constituye una causa inimputable que permita la exoneración de responsabilidad)<sup>25</sup>. Esta resolución es privativa de los transportes terrestres y aéreos<sup>26</sup>.

---

jurisprudencia en una primera etapa, fundamentó dicha responsabilidad en la garantía relativa a los vicios ocultos contemplados en los artículos 1641 y siguientes del Código Civil, lo que suponía un defecto intrínseco y no solamente un incumplimiento a una obligación de seguridad. En una segunda etapa, la Corte de Casación consagró la existencia de esta obligación de seguridad fundándola en el artículo 1147 del Código Civil, lo que permitía desligarse del régimen de responsabilidad relativo a la garantía de los vicios ocultos, e inspirarse más bien en la instrucción europea de 1985 aun no incorporada al derecho francés (V. Civ. 1<sup>ra</sup>, 20 de marzo de 1989, D. 1989.381, nota Malaurie, *Rev. trim. dr. civ.* 1989.381, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 11 de junio de 1991, *Bull. civ. I*, n° 201, D. 1993. Somm. 241, obs. Tournafond, *Rev. trim. dr. civ.* 1992.114, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 17 de enero de 1995, D. 1995.350, nota Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de octubre de 1996, *R.J.D.A.* 1997, n° 10; Civ. 1<sup>ra</sup>, 3 de mayo de 1998, *R.J.D.A.* 1998, n° 384).

<sup>25</sup> A partir de una ley del 5 de julio de 1985, esta obligación de resultado, así como la abundante jurisprudencia que su incumplimiento dio lugar, se ha limitado al transporte terrestre ferroviario. Esto no quiere decir que el transportista de pasajeros vía autopista no esté sujeto a una obligación de resultado. Sino que, a partir de la ley del 5 de julio de 1985, el incumplimiento de la obligación conlleva a una responsabilidad aún más estricta para el transportista vía autopista, ya que presupone sin más que el vehículo estuvo "implicado en el accidente", no siendo siempre admitida como exoneración la prueba de una causa inimputable. Por otro lado, en lo que compete a los daños que resultan de un accidente de tráfico, la ley del 5 de julio de 1985 establece un régimen reparatorio idéntico tanto para los pasajeros de un vehículo, sean o no transportados en virtud de un contrato,

En efecto, en el transporte marítimo de personas, el transportista está en principio sólo subordinado a una obligación de medios, aun cuando su culpa no tenga que ser probada por el pasajero<sup>27</sup>. En cuanto al

---

como para los terceros, como lo serían por ejemplo los peatones. Esta ley unificó los regímenes de responsabilidad en materia contractual y en materia extracontractual. No obstante, la obligación de resultado respecto al transporte terrestre sigue siendo útil para el caso en que el daño se produce sin la intervención del vehículo (cf. París, 10 de enero de 1989, *D.* 1989.IR.44, a propósito de un pasajero lesionado por un artefacto de propiedad de otro pasajero, no constituyendo necesariamente dicha circunstancia una causa inimputable capaz de exonerar de responsabilidad al transportista). Respecto a la aplicación de la ley del 5 de julio de 1985 respecto al contrato de transporte, cf. Sollety, *La loi du 5 juillet 1985 et le contrat de transport*, *J.C.P.* 1991.I.3508; Peyrefitte, *Le nouveau statut du passager transporté par route*, *Mélanges Breton et Derrida*, p. 321. En materia de transporte ferroviario, la obligación de seguridad de la S.N.C.F. no sólo compete a los accidentes de transporte, sino que se aplica igualmente a las agresiones que un pasajero puede ser víctima (cf. Aix-en-Provence 30 de junio de 2000, *J.C.P.* 2000.IV.2668; Civ. 1<sup>ra</sup>, 3 de julio de 2002, *D.* 2002.IR.2306). Cuando el pasajero no está sujeto a un contrato de transporte, se admite que la eventual responsabilidad en contra del transportista sea de naturaleza extracontractual, siendo su régimen igual al que se aplica en el caso del incumplimiento de una obligación contractual de resultado, porque se trata de la responsabilidad por hecho de las cosas estipulada en el artículo 1384, inc. 1<sup>ro</sup>. del Código Civil (Civ. 2<sup>da</sup>, 25 de marzo de 2001, *R.J.D.A.* 2001, n° 923). La solución es lógica. En efecto, del hecho de viajar sin un título que acredite el transporte no se desprende que se acepten los riesgos que conlleva dicho transporte.

<sup>26</sup> En virtud de un reglamento del Consejo de la Unión Europea del 9 de octubre de 1997, vigente desde el 17 de octubre de 1998, los transportistas aéreos titulares de una licencia para transportar librada por un Estado miembro de la Unión Europea son responsable de pleno derecho, en caso de fallecimiento o de lesiones corporales de un pasajero, sin poder probar ausencia de culpa. Consiste por ende en una responsabilidad objetiva. No obstante, la responsabilidad objetiva sólo se admite en casos en que el perjuicio asciende a un monto de 100000 DTS, lo que deja entrever que cuando el daño es superior a dicho monto, la prueba de la ausencia de culpa, aplicando las disposiciones de la Convención de Varsovia del 12 de octubre de 1929, podría operar. En efecto, esta Convención sujeta al transportista aéreo a una obligación de medios y no de resultado, v. *infra* n° 27. Sin embargo, una nueva Convención, destinada a remplazar la de Varsovia, firmada en Montreal el 28 de mayo de 1999 y vigente en Francia desde el 2004, modifica la responsabilidad del transportista de pasajeros vía aérea en cuanto a que, por una parte, contrariamente a la Convención de Varsovia no admite tope para la indemnización, y, por otro lado, establece que la obligación del transportista es de resultado hasta 100000 DTS, mientras que, si es superior, la obligación es de medios.

Independiente de la obligación impuesta al transportista aéreo por la Convención de Varsovia y por el reglamento europeo, éste está sujeto respecto de lo que ocurra fuera del transporte mismo, así como respecto al embarco y desembarco, a una obligación de seguridad de medios (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de julio de 1999, *D.* 2000.283, nota Pech Le Gac, a propósito de la escala hecha en un aeropuerto expuesto a un inminente riesgo de guerra, toda vez que el avión tenía reserva de combustible suficiente para aterrizar en otra parte).

<sup>27</sup> V. *infra*, n° 27. En cuanto al transporte de mercancías por vía marítima, se trata de un sistema de responsabilidad objetiva, sólo siendo posible que el transportista se exonere de su responsabilidad probando alguno de los casos “excepcionales y limitativamente enumerados por la ley” (por ejemplo en lo que respecta a los transportes locales, cf. art. 27 de la ley del 18 de junio de 1966), salvo en caso de que el expedidor o representante pruebe que el daño que la mercancía experimentó se desencadenó por culpa del transportista. La Convención de Varsovia de 1929 y la de Montreal de 1999 sujetan al transportista aéreo de mercancías a una obligación de resultado. Sin embargo, mientras que la Convención de Varsovia permite sobrepasar el tope de indemnización en caso de culpa inexcusable del

transportista terrestre de mercancías, la jurisprudencia, fundándose en el artículo L. 133-1 del Código de Comercio, admitió la existencia de una obligación de resultado en contra del transportista, prohibiendo el legislador (art. L. 133-1, inc. 3 C. com., en su redacción por una ley del 17 de marzo de 1905) toda cláusula contraria al contrato de transporte. Así, tanto el transportista terrestre de mercancías<sup>28</sup> como el transportista terrestre de personas<sup>29</sup>, pueden sólo eximirse de su responsabilidad probando la

---

transportista, la Convención de Montreal establece que su responsabilidad es siempre limitada, incluso en caso de culpa inexcusable.

<sup>28</sup> No obstante, tratándose del equipaje, la jurisprudencia rechaza no solamente que el transportista esté sujeto a una obligación de resultado, sino que también que la responsabilidad contractual pueda admitirse a partir del incumplimiento culposo de una obligación de medios. En efecto, en lo relativo al equipaje de mano, se trataría solamente de responsabilidad extracontractual, ya que al estar bajo la tutela del pasajero, no son objeto de una obligación del transportista (cf. Com. 22 de junio de 1954, *Bull. civ.* 3, n° 229). La solución se extendió al equipaje que el pasajero debe dejar a la entrada del vagón sin poder vigilarlos (Civ. 2<sup>da</sup>, 22 de abril de 1994, *Bull. civ.* 2, n° 122, *Rep. not.* 1994.1130, obs. Delebecque, *Rev. trim. dr. civ.* 1994.869, obs. Jourdain; Civ. 2<sup>da</sup>, 6 de marzo de 1996, *R.J.D.A.* 1996, n° 1285, *J.C.P.* 1996.I.3958, n° 4, obs. Fabre-Magnan, *D.* 1997. Somm. 25, obs. Delebecque, *Rev. trim. dr. civ.* 1997.139, obs. Jourdain), asunto muy discutible ya que en tal hipótesis, el equipaje deja de estar bajo la tutela del pasajero. En realidad, se debería probar que el transportista consiente en desplazar el equipaje, lo que justificaría el carácter contractual de su responsabilidad, que se deduce a partir del incumplimiento de una obligación de resultado (v. Civ. 1<sup>ra</sup>., 10 de julio de 1996, *R.J.D.A.* 1996, n° 1420, *Rev. trim. dr. civ.* 1997.139, obs. Jourdain, que revoca el fallo de una Corte de Apelaciones que había admitido la responsabilidad de la S.N.C.F. sin precisar si se trataba de una responsabilidad de naturaleza contractual o bien delictual. Comparar, París 24 de septiembre de 1996, *D.* 1996.IR.234, que considera que el robo de un equipaje genera una eventual responsabilidad contractual de la S.N.C.F., estando el contrato en estado de cumplimiento si el equipaje se encuentra a bordo del tren. Sin embargo, el fallo rechaza no obstante acordar la reparación del daño, en razón de que la base de licitación de la S.N.C.F., aprobado por decreto, excluye la reparación en lo que concierne el equipaje de mano. Comparar también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 25 de febrero de 2003, *D.* 2003.790, nota Gridel, fallo según el cual, en el transporte ferroviario de vehículos, después de haber sido el vehículo destruido por un incendio mientras se ejecutaba el transporte, se concluye que el transportista no está sujeto a ninguna obligación respecto del equipaje que se encuentra al interior. Según la Corte de Apelaciones de París, la obligación de seguridad de la S.N.C.F. no llega al punto de vigilar a la policía general de los vagones para prevenir los eventuales robos de artefactos de los pasajeros (París 2 de octubre de 1998, *D.A.* 1998.190). En cambio, en el transporte en autobús, el equipaje es parte de un contrato accesorio al relativo al transporte de personas, en que el transportista está sujeto a una obligación de resultado (Civ. 1<sup>ra</sup>, *D.A.* 1998.1393, *R.J.D.A.* 1998, n° 1225, *J.C.P.* 1999.II.10010, nota Rzepecki; Civ. 1<sup>ra</sup>, 26 de septiembre de 2006, *J.C.P.* 2006.II.10206, nota Mignot). La diferencia entre el transporte en autobús y el ferroviario es injustificable

<sup>29</sup> En lo relativo al transporte terrestre de personas, la ley no prohíbe, como lo hace en el transporte de mercancías, las estipulaciones del contrato relativas a la extensión de la obligación del transportista, como a su responsabilidad. Sin embargo, tenemos que considerar que desde la ley del 5 de julio de 1985, el régimen de la responsabilidad del transportista de pasajeros vía carretera es de orden público, lo que prohíbe que se estipulen en el contrato cláusulas que modifiquen la obligación del transportista, así como su responsabilidad en caso de incumplimiento, exceptuando eventualmente las cláusulas que se refieran al monto de la indemnización de perjuicios.

conurrencia de una causa inimputable (cf. los fallos pioneros de Civ. 13 de julio 1915 y de 10 de diciembre de 1917, *D.P.* 1917.1.205. V. también, París, 11 de mayo de 1998, *D.* 1988.IR.169, que admiten la misma solución en el caso de un transporte de valores)<sup>30</sup>. Independiente de la fase de cumplimiento del transporte propiamente tal, se ha admitido, con respecto al transporte aéreo internacional, que el transportista está sujeto a una obligación de resultado en cuanto a la obligación de cerciorarse de que el pasajero esté dotado de los documentos necesarios para ingresar al país de destino (Civ. 1<sup>ra</sup>, 7 de febrero de 2006, *J.C.P.* 2006.IV.1470, *D.* 2006.534, a propósito de un pasajero a quien se le impidió el ingreso en ese país por falta de visa). La solución es estricta. Sin embargo, se debe aprobar en razón de la facilidad que implica para el transportista la verificación a la cual puede proceder.

---

<sup>30</sup> En el transporte terrestre de mercancías, la obligación de resultado recae sobre el transportista desde el momento en que la mercancía le fue remitida hasta el momento en que se despoja de ella para entregarla a su destinatario (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, lro. de julio de 1969, *D.* 1969.640, nota G.C.M., *J.C.P.* 1969, 21 de julio de 1970.II.16488, nota Abadir; Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de noviembre de 1969, *J.C.P.* 1970.II.16190; Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de noviembre de 1977, *J.C.P.* 1978.IV.22; Versailles, 28 de octubre de 1988, *D.* 1989.234, nota Estoup; Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de octubre de 1997, *R.J.D.A.* 1997, n°48). El pasajero es quien debe demostrar que el accidente se produjo durante el transporte. El razonamiento difiere en el caso en que el pasajero pretende invocar que su caída se debe a una aceleración brusca del tren, sin probar la realidad de los hechos consistente en que nada le permitió sujetarse (Nancy 13 de diciembre de 1995, *J.C.P.* 1996.IV.1589). Según una antigua jurisprudencia, antes del nacimiento de la obligación de resultado y con posterioridad al momento que acababa, el transportista seguía sujeto a una obligación contractual, siendo ésta eso sí, sólo de medios, por lo que se requería la prueba de la culpa del transportista en lo que se refiere por ejemplo a los accidentes que ocurren en el andén (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de julio de 1970, *J.C.P.* 1970.II.16488, *D.* 1970.767, nota Abadir). Esta jurisprudencia era discutible, ya que no vemos cómo se podía justificar una obligación contractual, no existiendo ninguna diferencia entre aquel que se cae en la calle o bien en el andén de la estación. En realidad, la jurisprudencia quería en dichas hipótesis excluir la responsabilidad extracontractual de manera de que no se admitiera el mismo régimen reparatorio que se aplica a la obligación contractual de resultado. En efecto, si la responsabilidad por accidentes en el andén es de naturaleza extracontractual, tiene que dar lugar a la aplicación del artículo 1384, inc. 1ro. del Código Civil, que es la fuente de una responsabilidad objetiva. Finalmente, se consagró esta última solución (Civ. 1<sup>ra</sup>, 7 de marzo de 1989, *D.* 1991.1, nota Malaurie, *Rev. trim. dr. civ.* 1989.548, obs. Jourdain; Civ. 2<sup>da</sup>, 25 de junio de 1998, *D.* 1999.416; París 25 de abril de 2000, *J.C.P.* 2002.II.10032, nota Delagarde). V. sobre el tema, Mascala, *Accidents de gare: le déraillement de l'obligation de sécurité*, *D.* 1991, *Chron.* 80; Nerac-Croisier, *Soliloque sur la responsabilité du transporteur*, *D.* 1995, *Chron.* 35. En los accidentes que se produzcan cuando un pasajero deba cambiar de tren para llegar a su destino final se desprende una responsabilidad extracontractual (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 19 de febrero de 1991, *D.* 1991.IR.81; París 15 de marzo de 1991, *D.* 1991.IR.106). Independiente de la obligación de seguridad, se pudo admitir que el transportista estaba sujeto a una obligación de puntualidad, que podría ser de resultado, salvo cláusula estipulando lo contrario (cf. París 4 de octubre de 1996, *J.C.P.* 1997.II.22811, nota Paisant y Brun, *R.J.D.A.* 1997, n° 355).



Después de haber en un principio rehusado imponer una obligación de resultado a un empresario de andariveles de arrastre, la jurisprudencia admitió la solución contraria (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de octubre de 1968, *D.* 1969.157, nota Mazeaud, *J.C.P.* 1969.II.15745). La razón según la cual se distinguía al empresario de andariveles de arrastre del transportista se debía a que el usuario del andarivel, contrariamente al pasajero, tenía un rol activo durante la ejecución del desplazamiento. Sin embargo, se trataba de un fundamento discutible. De la misma forma, el pasajero que se desplaza al interior de un tren en marcha tiene un rol activo y nunca se cuestionó limitar la obligación de resultado sólo para beneficiar al pasajero que se queda sentado en su asiento (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 23 de julio de 1979, *J.C.P.* 1979.IV.32). En definitiva, el rol más o menos activo del acreedor de una obligación contractual no constituye un criterio satisfactorio para distinguir entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. En efecto, desde el momento en que no se puede reprochar culpa alguna al acreedor, se debe dejar de considerar su rol activo. Es sólo en situaciones donde el acreedor actúa malintencionadamente o bien con imprudencia culposa que se debe tomar en consideración su papel activo<sup>31</sup>. Sin embargo, la primera sala de la Corte de Casación no se ajustó a estas razones, y retornó hacia la jurisprudencia inicial al imponer al encargado de un andarivel de arrastre una mera obligación de medios en virtud del rol activo que tenía el usuario (Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de noviembre de 1992, *D.* 1994.45, nota Brun, *J.C.P.* 1993.II.22058, nota Sarraz-Bournet, *Contrats, conc. consomm.* 1993, n° 104, obs. Leveneur, *D.* 1994. Somm. 15, obs. Fortis, *Rev. trim. dr. civ.* 1993. 364, obs. Jourdain; Chambéry 22 de febrero de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.2069. V. no obstante, Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de julio de 1995, *D.* 1995.IR.222, *J.C.P.* 1996.II.22620, nota Paisant y Brun, en donde la resolución podría implícitamente estar fundada en una obligación de resultado, no habiéndose

---

<sup>31</sup> La Corte de Casación se fundó en el rol activo que recae sobre el esquiador durante las operaciones de embarque y desembarque de un andarivel de silla para responsabilizar en dichos momentos al encargado a sólo una obligación de medios (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 11 de marzo de 1986, *D.* 1986, *D.* 1986.IR.210, *J.C.P.* 1986.IV.146, *Rev. trim. dr. civ.* 1986.767, obs. Huet; Civ. 1<sup>ra</sup>, 11 de junio de 2002, *J.C.P.* 2002.IV. 2322, *D.* 2002.IR.2099, *Petites Affiches* 30 de mayo de 2003, nota Cochet; Chambéry 9 de enero de 2007, *J.C.P.* 2007.IV.1853). La conclusión se opone diametralmente a la admitida con relación a los accidentes acaecidos en la fase de ascenso o descenso de un vehículo de transporte, no siendo justificable dicha distinción.

desprendido culpa alguna por parte del encargado. Comparar Civ. 1<sup>ra</sup>, 17 de marzo de 1993, *R.J.D.A.* 1993, n° 775, *D.* 1995. Somm. 66, obs. Mouly, a propósito de un encargado de una pista de bob sleight, considerando el fallo que la obligación es de resultado debido a que los usuarios no pueden libremente elegir el recorrido, lo que bajo nuestro punto de vista, de todas formas no implicaría un papel estrictamente pasivo por parte de ellos).

En cambio, en lo que atañe al transporte vía telesilla, debido a que el esquiador sólo tiene un rol activo durante las operaciones de embarque y desembarque y no así durante el desplazamiento mismo, la Corte de Casación sólo impone una obligación de resultado al encargado mientras dure el transporte, y una obligación de medios al momento del embarco y desembarco (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 10 de marzo de 1998, *D.* 1998.IR.98, *D.A.* 1998.759, *R.J.D.A.* 1998, n° 55, *D.* 1998.505, nota Mouly).

En virtud de la proximidad respecto a un contrato de transporte, la jurisprudencia considera que el encargado de un carrusel está sujeto a una obligación de resultado en cuanto a la seguridad de los usuarios (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 13 de noviembre 1974, *J.C.P.* 1976.II.18344, nota crítica de Rodière; Civ. 1<sup>ra</sup>, 18 de febrero de 1986, *J.C.P.* 1986.IV.121, *Bull. civ.* 1, n° 32, *Rev. trim. dr. civ.* 1986.770, obs. Huet; París, 25 de abril de 1989, *D.* 1989.IR.162. V. también, Civ. 1<sup>re</sup>, 28 de octubre de 1991, *Bull. civ.* 1, n° 289, *D.* 1992. Somm. 271, obs. Fortis, en lo que compete a un encargado de un tobogán y Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de octubre 1997, *R.J.D.A.* 1998, n° 13, *D.* 1998.271, nota Brun, en cuanto al organizador de un vuelo en parapente, *J.C.P.* 1998.II.10103, nota Varet). En cambio, la obligación de un empresario de espectáculos hacia sus clientes no es en principio más que una obligación de medios<sup>32</sup>.

**15.- Otros Contratos.** La jurisprudencia considera que en virtud del contrato de promoción inmobiliaria, tal como se encuentra definida por el artículo 1831-1 del Código Civil, el promotor está sujeto a una obligación de resultado hacia el dueño de la obra, en virtud de la cual

---

<sup>32</sup> V. *infra*, n° 21.

está obligado a entregar una construcción exenta de vicios o de defectos (Civ. 3<sup>ra</sup>, 13 de octubre de 1976, *J.C.P.* 1976.IV.354, *D.* 1977.IR.16; Civ. 3<sup>ra</sup>, 13 de diciembre de 1977, *J.C.P.* 1978.IV.50). De la misma forma, la jurisprudencia impone al subcontratista una obligación de resultado en lo que respecta la obra que se obliga a efectuar para el constructor principal, acreedor de dicha obligación (Civ. 3<sup>ra</sup>, 24 de febrero, *D.* 1982.IR.240, *J.C.P.* 1982.IV.170, *Rev. trim. dr. civ.* 1983.150, obs. Rémy; Civ. 3<sup>ra</sup>, 22 de noviembre de 1983, *J.C.P.* 1984.IV.38; Civ. 3<sup>ra</sup>, 8 de junio de 1987, *D.* 1987.IR.147; Civ. 3<sup>ra</sup>, 17 de diciembre de 1997, *R.J.D.A.* 1998, n° 283, *D.A.* 1998.291).

La jurisprudencia ha consagrado obligaciones de resultado en los ámbitos más diversos. Así, el dueño de un restaurante con respecto a la seguridad de sus clientes está sujeto a una obligación de resultado en cuanto deberá servirles alimentos libres de riesgo. No sólo es innecesario que la víctima pruebe la culpa del dueño del restaurante, sino además éste sólo podrá eximirse de la obligación de reparación probando una causa inimputable (cf. T.G.I. Saumur, 22 de marzo de 1978, *J.C.P.* 1979.IV.348; Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de junio de 1981, *D.* 1981.IR.406, *J.C.P.* 1981.IV.299, *Rev. trim. dr. civ.* 1982.770, obs., Durry). Esta solución fue admitida en casos en que la culpa no podía probarse.

Mientras que la responsabilidad a la hora de un acto médico supone prueba de culpa<sup>33</sup>, el enfermero que realiza una inyección intramuscular está sujeto a una obligación de resultado (Civ. 1<sup>ra</sup>, 17 de junio de 1980, *Bull. civ.* 1. n° 187, *Rev. trim. dr. civ.* 1981.165, obs. Durry). Asimismo, tanto un laboratorio farmacéutico como un centro de transfusión sanguínea deben proporcionar a sus clientes productos exentos de vicios y que tengan todas las cualidades que éstos puedan esperar (cf. T.G.I. París 1ro. de julio de 1991, *J.C.P.* 1991.II.21762, nota Harichaux, a propósito del suministro de sangre contaminada con el virus del sida hecha por un centro de transfusión sanguínea; Aix-en Provence 12 de julio de 1993, *D.* 1994.13, nota Vidal; Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de abril de 1995, *J.C.P.* 1995.II.22467, nota Jourdain).

---

<sup>33</sup> V. *infra*, n° 21.

A partir de la ley del 18 de mayo de 1998, esta jurisprudencia ya no presenta interés respecto de los productos puestos en circulación con posterioridad a su entrada en vigencia, toda vez que impone una obligación de seguridad de resultado al productor. Después de haber sentenciado que la responsabilidad de una clínica, producto de las infecciones intrahospitalarias contagiadas en una sala de operaciones, se fundaba en una presunción de culpa (Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de junio de 1998, *R.J.D.A.* 1998, n° 948, *J.C.P.* 1999.II.10122, nota Denis-Chaubet), la Corte de Casación consagró en su perjuicio una obligación de resultado que conducía hacia una responsabilidad objetiva en caso de incumplimiento (Civ. 1<sup>ra</sup> 29 de junio de 1999, *D.* 1999.559, nota Thouvenin, *J.C.P.* 1999.II.10138, análisis Sargos, *Rep. not.* 1999.994, obs. Mazeaud). La solución es estricta, pero se justifica en la medida en que no solamente el paciente se entrega de forma total al cuidado del establecimiento, sino también porque tiene el pleno control de la higiene de sus dependencias<sup>34</sup>. No obstante, una ley del 4 de marzo de 2002 contempló, en lo que concierne a las infecciones intrahospitalarias, un régimen indemnizatorio distinto de la responsabilidad civil, financiado por un fondo público, considerando que estas infecciones constituyen un accidente médico provocado por un riesgo inherente al ejercicio de la profesión. La medida se justifica respecto a los accidentes terapéuticos impredecibles, que deberían excluir la responsabilidad de los médicos porque corresponden a riesgos frente a los que el médico nada puede hacer. Se justifica menos tratándose de las infecciones intrahospitalarias acaecidas en un recinto hospitalario.

El instalador de un sistema de alarma está sujeto a una obligación de resultado respecto al funcionamiento del sistema (Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de junio de 1994, *Contrats, conc. Consomm.* 1994, n° 216, obs. Leveuneur, *R.J.D.A.* 1995, n° 4). El vendedor-fabricante de una máquina libradora de cheques, en cuyos folletos publicitarios garantizaba ser infalsificables, ha faltado a su obligación desde el momento en que el cliente ha sido víctima de cheques falsificados (Com. 17 de junio de 1997, *D.A.* 1997.1002).

---

<sup>34</sup> Es la razón por la cual era muy discutible sostener el criterio sustentado en uno de los fallos del 29 de junio de 1999 que extendía la obligación de resultado al médico. V. también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 27 de marzo de 2001, *Contrats, Conc. consomm.* 2001, n° 105, obs. Leveuneur.

Si bien en general las personas o los establecimientos encargados de la guarda de niños están sujetos a una obligación de medios en cuanto al cuidado de los niños confiados, esto no impidió que la Corte de Casación impusiera una obligación de resultado al que invoca un título profesional y recibe remuneración por el cuidado de un niño (Civ. 1<sup>ra</sup>, 13 de enero de 1982, *Bull. civ.* 1, n° 24, *D.* 1982.IR.3639 obs. Larroumet, *Rev. trim. dr. civ.* 1982.699 obs. Durry. Contra, Civ. 1<sup>ra</sup> 18 de noviembre de 1997, *Bull. civ.* 1, n° 318, *Rev. trim. dr. civ.* 1998.119, obs. Jourdain, *D.* 1998. Somm. 197, obs. Delebecque, fallo según el cual la obligación es sólo de medios). Sobre los establecimientos de educación recae también una obligación de resultado, en particular respecto al hecho de las cosas que se utilizan en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (Civ. 1<sup>ra</sup>, 17 de enero de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.702).

De la misma forma acontece en lo que concierne la obligación del instalador de un calefactor en un criadero de aves de corral (Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de junio de 1982, *D.* 1982.IR.459, *J.C.P.* 1982.IV.309) o respecto de la E.D.F. quienes están sujetos a una obligación de resultado respecto a la seguridad de las conexiones que instale (Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de diciembre de 1986, *J.C.P.* 1987.II.20190, nota Gridel. V. también, Versailles, 9 de junio de 1989 *D.* 1988.IR.244; Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de enero de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.528, según el cual el abastecedor de agua está sujeto a una obligación de resultado consistente en poner a disposición del usuario un medidor en buen estado) o bien del encargado de un estacionamiento (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de enero de 1991, *R.J.D.A.* 1991, n° 341, según el cual el encargado incumplió su obligación contractual cuando una barrera de salida cayó de forma imprevista sobre un automóvil, no habiendo el conductor realizado ninguna maniobra inadecuada; Civ. 1<sup>ra</sup>, 23 de febrero de 1994, *D.* 1995.214, nota Dion, *Rev. trim. dr. civ.* 1994.616, obs. Jourdain, a propósito de la inundación de estacionamiento). Se ha admitido que el contrato de soporte y mantención informática imponía obligaciones de resultado al contratista (Versalles 7 de noviembre de 2002, *R.J.D.A.* 2003, n° 378). La obligación del contratista de terminar los

trabajos en la fecha prevista en el contrato es una obligación de resultado (Civ. 3<sup>ra</sup>, 13 de septiembre de 2005, *Petites Affiches* 23 de noviembre 2005, nota Boismain).

Las agencias de viajes, al ser mandatarias de sus clientes, están como todo mandatario sujetas sólo a una obligación de medios, incluso siendo remuneradas, a pesar de que la jurisprudencia no ha dudado en sujetarlas a obligaciones más estrictas y, en consecuencia, a admitir fácilmente su culpa en la ejecución de un mandato<sup>35</sup>. Sin embargo, algunos fallos llegaron más lejos, responsabilizando a las agencias de viajes con obligaciones de resultado. Así sucede no solamente cuando la agencia de viajes asume las obligaciones de un transportista, situación absolutamente normal, (cf. T.G.I. Strasbourg, 14 de febrero de 1977, *D.* 1978.248, nota Brill) sino que además, y siendo bastante discutible ya que la agencia actúa simplemente como mandataria, cuando, a pesar de no mediar culpa alguna, el pasaje no es eficaz (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 31 de mayo de 1978, *D.* 1979.IR.62, obs. Larroumet, *D.* 1979.48, nota FoulonPiganiol; Versailles 31 de mayo de 1996, *D.* 1997.229, nota Dagorne-Labbé. V. sin embargo, Civ. 1<sup>ra</sup>, 22 de octubre de 2002, *Petites Affiches* 18 de junio de 2003, que exige la prueba de culpa).

Recientemente, la Corte de Casación reconoció que el empleador, en virtud de un contrato de trabajo concluido con el asalariado, está sujeto a una obligación de seguridad de resultado, en lo que se refiere a enfermedades profesionales (Ass. plén. 28 de febrero de 2002, *D.* 2002.2696, obs. Prêtot, *J.C.P.* 2002.I.186; Soc. 21 de febrero de 2002, *J.C.P.* 2002.II.10053, concl. Benmaklouf, *Rev. trim. dr. civ.* 2002.310, obs. Jourdain; Civ. 2<sup>da</sup>, 14 de octubre de 2003, *J.C.P.* 2003.IV.2903; Civ. 2<sup>da</sup>, 14 de diciembre de 2004, *D.* 2005.IR.240; Soc. 21 de junio de 2006, *J.C.P.* 2006.II.10166; a propósito de un hostigamiento moral) como a los accidentes del trabajo (Soc. 11 de abril de 2002, *D.* 2002.2215, nota Saint-Jours, *J.C.P.* 2002.I.186, obs. Viney, Soc. 31 de octubre de 2002, *D.* 2002.IR.3121; Soc. 31 de octubre de 2002, *D.* 2003. Somm. 382, obs. Signoretto, *D.* 2003.644, nota Saint-Jours; Civ. 2<sup>da</sup>, 3 de abril de 2003, *J.C.P.* 2003.IV.1969; Civ. 2<sup>da</sup>, 16 de septiembre de 2003, *J.C.P.* 2003.IV.2716 y 2718;

---

<sup>35</sup> V. *infra*, n° 21.



Ass. Plén. 24 de junio de 2005, *J.C.P.* 2005.IV.2847, *D.* 2005.IR.1881; Civ. 2<sup>da</sup>, 22 de febrero de 2007, *J.C.P.* 2007.IV. n° 108), siendo que hasta ese momento había rechazado consagrar tal obligación por su precaria utilidad debido al reintegro de la indemnización de los accidentes de trabajo y de las enfermedades a la Seguridad Social<sup>36</sup>.

No se trata aquí sino de algunos ejemplos significativos elegidos entre muchos otros. En estas hipótesis, el interés de la obligación de resultado consiste no solamente en liberar al acreedor de la prueba de la culpa del deudor, sino que sobretodo, vincular el incumplimiento de la obligación y en consecuencia el advenimiento del daño a la actividad de deudor, desde el momento en que la concurrencia de una causa inimputable no puede admitirse. Es lo que explica que carece de fundamentos el recurso de casación que reprocha haber condenado al deudor al pago de una indemnización de perjuicios, aun cuando pudiese parecer que el deudor no ha incurrido en culpa, desde el momento en que no pudo demostrar una causa que lo eximiera de su responsabilidad (cf. Civ. 2<sup>da</sup>, 24 de febrero de 1983, *J.C.P.* 1938.IV.148). Esto también explica que cuando el deudor está sujeto a una obligación de resultado, no se le debe exonerar de su responsabilidad cuando existe duda sobre el origen del daño (cf. Civ. 3<sup>a</sup>, 16 de marzo de 1988, *J.C.P.* 1988.IV.190, con relación a la responsabilidad de un

---

<sup>36</sup> Esta jurisprudencia está llena de contradicciones e incoherencias. En efecto, la obligación de seguridad está destinada para que la responsabilidad del empleador sea admitida. Sin embargo, el empleador sólo es responsable cuando se puede deducir en su contra culpa inexcusable, lo que explica que la jurisprudencia considere como culpa inexcusable el incumplimiento de la obligación de seguridad. Actuando así, la Corte de Casación desconoce la naturaleza de la responsabilidad por incumplimiento de una obligación de resultado, respecto de la cual sabemos que se trata de una responsabilidad objetiva que, en consecuencia, no supone la culpa. Es artificial e incoherente calificar a una obligación de seguridad como una de resultado, para poder deducir que el incumplimiento de esta obligación constituye culpa inexcusable. La contradicción es a tal punto flagrante que, no solamente el incumplimiento a una obligación de seguridad debe ser probado, lo que corresponde en este caso a la no puesta en marcha por parte del empleador de las medidas necesarias de protección del asalariado (Civ. 2<sup>da</sup>, 8 de julio de 2004, *D.* 2004.IR.2474, Soc. 29 de junio de 2005, *J.C.P.* 2005.II.10144, en materia de tabaquismo en la empresa), lo que no corresponde al régimen jurídico de la obligación de resultado, sino que además es indiferente para la Corte de Casación que el incumplimiento a la obligación de seguridad haya sido o no la causa del accidente que fue víctima el asalariado, toda vez que basta que sea la causa necesaria (Ass. Plén. 24 de junio de 2005, *J.C.P.* 2005.IR.1881), lo que demuestra, por lo demás, la voluntad de perpetuar la equivalencia de las condiciones más que la causalidad adecuada (v. *infra* n° 70).

arrendatario en el caso de un incendio en aplicación del artículo 1733 del Código Civil, no siendo posible exonerarse de responsabilidad sólo demostrando una incertidumbre respecto a la causa del incendio)<sup>37</sup>.

**16.- Culpa del deudor de una obligación de resultado.** Si bien la culpa del deudor de una obligación de resultado no es un requisito para desprender su responsabilidad, puede ocurrir que el incumplimiento se origine por un comportamiento culpable. En este caso, no porque la obligación sea de resultado está prohibido deducir la responsabilidad del deudor a través de la constatación de culpa<sup>38</sup>. Si la culpa puede ser fácilmente probada por el acreedor, éste se fundará en ella para obtener que el deudor sea condenado al pago de una indemnización de perjuicios. Es lo que explica ciertos fallos de la jurisprudencia donde la cuestión de la culpa es protagonista. No obstante, de lo anterior no se deduce que la culpa sea necesaria para condenar al deudor. Así, la culpa del transportista terrestre fue admitida en diversos casos (cf. Civ. 1ro., 11 de enero de 1983, *J.C.P.* 1938.IV.959 en lo relativo a la falta de precauciones en el cierre de las puertas de un tren). Asimismo, si bien no hay duda que el proveedor de gas o de electricidad está sujeto a una obligación de resultado (cf. Civ. 1ª, 9 de diciembre de 1986, *J.C.P.* 1987.II.20790, nota Gridel y Civ. 1ª, 17 de noviembre de 1987, *D.* 1987.IR.244, *J.C.P.* 1988.IV.30, según el cual el proveedor de electricidad está sujeto a una obligación de resultado respecto a la seguridad de instalaciones y conexiones. V. también 16 de diciembre de 1987, *J.C.P.* 1988.IV.79, en relación con el abastecedor de gas), su culpa puede ser constatada durante la ejecución de su

---

<sup>37</sup> En cambio, el arrendatario no es acreedor de una obligación de seguridad corporal de resultado (cf. Civ. 3ª, 21 de noviembre de 1990, *J.C.P.* 1991.IV.23). Esta obligación debe no solamente ser vinculada con la obligación de conservar la cosa arrendada o con la que concierne la puesta a disposición del arrendatario de una cosa sin vicios. Sin embargo, en estos casos el arrendatario debe probar el defecto en la mantención o bien el vicio de la cosa (cf. Civ. 3ª, 29 de abril de 1987, *Bull. civ.* 3, n° 90, *Rev. trim. dr. civ.* 1988.149, obs. Remy).

<sup>38</sup> Salvo obviamente si se trata de calificar la obligación como de resultado para deducir que su incumplimiento constituye culpa de cierta gravedad, v. la nota n° 36.

obligación. (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 23 de octubre de 1984, *J.C.P.* 1985.IV.7; Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de enero de 1985, *J.C.P.* 1985.IV.113. V. Nîmes 8 de marzo de 1990, *J.C.P.* 1990.II.21573, nota Paisant).

Más aun, cuando se constata la existencia de culpa, y que ésta además consiste en culpa grave, es decir, dolosa o lata, acarreará las mismas consecuencias que cuando la responsabilidad se funda en la culpa<sup>39</sup>. No obstante, la gravedad de la culpa debe ser determinada, y esto no puede obviamente derivarse del simple hecho de constatar la infracción del resultado<sup>40</sup>. Es la razón por la cual resulta injustificable la conclusión que pretende asimilar el incumplimiento de una obligación de resultado a una culpa lata, para descartar por ejemplo la aplicación de una cláusula limitativa de responsabilidad (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de junio de 1994, *Contrats, conc. Consomm.* 1994, n° 216).

#### β) Régimen estricto.

**17.- Obligaciones de dar que tienen por objeto una cosa de género.** Ciertas obligaciones de resultado son más estrictas que otras, en el sentido en que el deudor no puede exonerarse de su responsabilidad probando una causa inimputable. Desde el momento en que la obligación se incumplió, la responsabilidad del deudor debe deducirse sin posibilidad de exoneración.

Se trata en primer lugar, del caso que atañe a las obligaciones de dar, cuando tienen por objeto una suma de dinero, o de forma más general una cosa de género. Si la obligación de dar, es decir, de transferir la propiedad, consiste en una obligación de resultado en virtud de su propia naturaleza, el contenido de esta obligación variará según tenga por objeto un cuerpo cierto o una cosa de género. Si la obligación tiene por objeto un cuerpo cierto, el deudor no será responsable si prueba que una causa

---

<sup>39</sup> Sobre las consecuencias de la culpa dolosa y de la culpa lata, v. *infra*, n° 29, 33 y 34.

<sup>40</sup> Lo cual constituye una razón adicional para criticar la resolución de la Corte de Casación en cuanto a la asimilación del incumplimiento por parte del empleador de su obligación de seguridad de resultado a una culpa inexcusable. V. *supra*, nota n° 36.

inimputable le impidió cumplir con la obligación<sup>41</sup>. La obligación de dar se sujeta al derecho común de las obligaciones de resultado. Pero si la obligación de dar tiene por objeto una cosa de género, no es posible exonerar al deudor de su responsabilidad probando una causa inimputable, debido a que podrá siempre encontrar una cosa de equivalente calidad y en la misma cantidad, cuestión que justifica el principio *genera non pereunt*. Además, tratándose de una obligación de pagar una suma de dinero, no tiene sentido considerar un cumplimiento por equivalencia. Dará lugar a un cumplimiento forzado en especie, que opera a través de un embargo hecho por el acreedor sobre los bienes del deudor. Esto será posible en la medida que el acreedor disponga de un título ejecutivo, lo que en ciertos casos obliga al acreedor a obtener una sentencia. Sin embargo, esta sentencia tiene por objeto un cumplimiento forzado en especie y no un cumplimiento por equivalencia. No obstante, a lo principal pueden agregarse intereses moratorios que reparan el daño derivado del retraso en el cumplimiento<sup>42</sup>.

**18.- Obligaciones de garantía.** En ciertos contratos el deudor, ya sea en virtud de un régimen imperativo de la obligación establecido por la ley o la jurisprudencia, o en virtud de la voluntad de las partes, está sujeto a una obligación de garantía. La obligación de garantía consiste en una obligación de resultado cuyo incumplimiento dará lugar a la responsabilidad del deudor, sin que sea posible eximirse probando una causa inimputable la que, normalmente en el derecho común, sí lo eximiría de responsabilidad. De esta forma, el deudor puede aceptar hacerse cargo de los casos de fuerza mayor. No obstante, la obligación de garantía no se extiende hasta obligar a reparar el daño causado por la culpa del acreedor. En esta situación, tendrá lugar, según los casos, una exoneración total o parcial de la responsabilidad del deudor.

---

<sup>41</sup> V. *supra*, n° 12.

<sup>42</sup> V. *infra*, n° 53 y s.

Una de las consagraciones más destacables de la obligación de garantía la encontramos a propósito de la venta, en lo que concierne a la garantía de los vicios ocultos de la cosa vendida<sup>43</sup>. Esta obligación del vendedor se deriva del artículo 1641 del Código Civil. Aunque la sanción del incumplimiento de la obligación de garantía varía según si el vendedor conocía o ignoraba los vicios al momento de la venta (cf. la comparación entre los artículos 1645 y 1646 C. civ.), el principio radica en que el vendedor garantiza incluso los vicios que ignora. La solución, afirmada en el artículo 1643, lleva a considerar que el vendedor está sujeto a una obligación de resultado y que la prueba de su culpa, incluso no existiendo mala fe de su parte, no es necesaria. La jurisprudencia aplica de forma estricta esta obligación de garantía en lo que concierne a los vendedores profesionales, al menos en sus relaciones con compradores no profesionales. En efecto, no solamente los equipara a vendedores de mala fe, en el sentido que no pueden pretender haber ignorado los vicios de la cosa vendida, sino que también, en virtud de dicha asimilación, la jurisprudencia no admite en caso alguno la validez de las cláusulas del contrato de venta que estipulen que la garantía sería limitada o suprimida (argumento extraído del artículo 1643 C. civ., que prohíbe al vendedor de mala fe estipular cláusulas que impidan la garantía).

La obligación de garantía del vendedor es más estricta que la obligación de resultado de derecho común. Ciertamente, el vicio que el comprador ignoró, aun cuando se haya manifestado con posterioridad a la venta, debe ser anterior a ésta. Sin embargo, no es necesario que el vicio sea imputable al vendedor. Poco importa la causa del vicio, desde el momento en que éste existía al tiempo de la venta. Asimismo, la obligación hace responsable al vendedor por los vicios causados incluso por una causa inimputable. No obstante, el vendedor no sería responsable de un vicio imputable al comprador. Pero, en este caso el vicio sobrevendrá, la mayoría de las veces, con posterioridad al contrato de venta.

---

<sup>43</sup> Respecto a la imposibilidad de admitir una causa inimputable en lo que concierne a la obligación de garantía del vendedor respecto a los vicios ocultos, v. observaciones Tournafond, *D.* 1999. Somm. 16.

Ciertamente no todas las obligaciones de garantía son equivalentes, siendo algunas más estrictas que otras<sup>44</sup>, sin considerar que serán con frecuencia convenidas en función de las voluntades de las partes del contrato. No obstante, la obligación que recae sobre el vendedor en virtud de los artículos 1641 y siguientes del Código Civil es un caso emblemático en la especie. Por lo demás, las voluntades de las partes no son siempre soberanas para disponer respecto de la obligación de garantía que pesa sobre el vendedor. No sólo la garantía es imperativa tratándose de vendedores profesionales, sino que además, tratándose de los contratos pactados con los consumidores, el vendedor profesional está sujeto como mínimo a la garantía legal, la que ya es bastante extensa (cf. art. 2 y 4 del decreto del 24 de marzo de 1978, tomado por la aplicación del art. L. 132-1 C. consomm., relativo a las cláusulas abusivas).

b) Obligaciones de medios.

**19.- Tres problemas.** En lo que se refiere al régimen de la responsabilidad civil, la obligación de medios plantea tres problemas. En primer lugar, se debe determinar el contenido de la obligación. En segundo lugar, es menester distinguir sobre quién recae la carga de la prueba en caso de incumplimiento culpable de la obligación. Finalmente, ¿cuales son las consecuencias de tomar en cuenta la gravedad de la culpa?

β) El contenido de la obligación de medios.

**20.- Apreciación in abstracto de la culpa y contenido de la obligación.** Sabemos que tratándose de una obligación de resultado, el principio de la responsabilidad del deudor debe admitirse desde el

---

<sup>44</sup> Es cierto que algunas obligaciones que podrían ser consideradas como de garantía son en realidad obligaciones de resultado. V., por ejemplo a propósito de la obligación que recae sobre un organismo de transfusión sanguínea de proporcionar sangre sin vicios, Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de abril de 1995, *J.C.P.* 1995.II.22467, nota Jourdain y Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de julio de 1996, *D.* 1996.610, nota Faubert-Faivre. No cabe duda alguna que estas decisiones fueron influenciadas por la instrucción del 25 de julio de 1985 en materia de responsabilidad por el hecho de productos defectuosos, la que no había aún sido incorporada al derecho francés.

momento en que el acreedor no ha obtenido satisfacción, sólo siendo posible la exoneración probando una causa inimputable, siempre y cuando no se trate de una obligación de garantía. Por ende, el régimen de la responsabilidad es simple. En lo que respecta a las obligaciones de medios, el régimen es mucho más complejo. En efecto, a sabiendas que el incumplimiento de una obligación de medios sólo da lugar a la responsabilidad del deudor si el incumplimiento es culposo, es necesario, para saber si incurrió en culpa, determinar el contenido exacto de la obligación<sup>45</sup>. Contrariamente a las obligaciones de resultado, las obligaciones de medios son susceptibles de más o de menos, en el sentido que el deudor puede estar, según los casos, obligado contractualmente de hacer más o menos para que el acreedor obtenga satisfacción, y sólo en el caso de no hacer lo que se había comprometido a hacer, podremos considerar que incurrió en culpa. Se incurre en culpa sólo si se actuó de manera diferente a la que un deudor normalmente diligente hubiese actuado. Tanto en materia contractual, como en materia extracontractual, la culpa se aprecia *in abstracto*, es decir, teniendo como referente un modelo abstracto de individuo normalmente diligente, razonable o prudente. Al menos, así se procede respecto a las culpas involuntarias, ya que la culpa voluntaria, también llamada culpa dolosa o intencional, supone una apreciación de la conciencia de quien se cree culpable, es decir, que ella es valorada *in concreto*<sup>46</sup>.

Sin embargo, una cosa es apreciar la culpa *in abstracto*, y otra, determinar el contenido de la obligación a la cual el deudor está sujeto. No obstante, sucede que apreciación *in concreto* y contenido de la obligación son confundidas a pesar de ser dos cuestiones diferentes. Así, el artículo 1927 del Código

---

<sup>45</sup> Estamos de acuerdo con la resolución de un fallo de la Sala Comercial de la Corte de Casación según el que "quien solicita la reparación del daño derivado del incumplimiento de una obligación de hacer, debe, para probar la culpa del deudor, establecer el contenido de la obligación supuestamente incumplida" (Com. 15 de enero de 1991, J.C.P. 1991.IV.95). El fallo es no obstante criticable en la medida en que obliga también al acreedor a establecer la "naturaleza de la obligación" para poder probar la culpa. Si bien es esencial determinar la naturaleza de la obligación, es decir, saber si ella es de medios o de resultado, asunto que le compete al acreedor, no obstante, como el incumplimiento de una obligación de resultado no es sancionado por una responsabilidad basada en la culpa, no es correcto considerar que la prueba de la naturaleza de la obligación sea necesaria para probar la culpa. Esto resulta apropiado sólo para la obligación de medios.

<sup>46</sup> V. *infra*, n° 30.



Civil, enuncia que “el depositario debe emplear, en la conservación de la cosa depositada, los mismos cuidados que emplea en la conservación de sus propias cosas”. A partir de este artículo se intentó alguna vez establecer que la culpa del depositario se valoraría *in concreto*, es decir, con relación a lo que éste podría hacer en virtud de sus aptitudes. En realidad, esto es totalmente falso. Incluso si el depositario no es diligente con sus propias cosas, incurrirá en culpa de no serlo con las cosas depositadas. Su culpa es valorada *in abstracto* y la fórmula del artículo 1927 solamente tiene por objeto permitir determinar el contenido de la obligación a que está sujeto en cuanto a la conservación de la cosa. El depositario debe conservar las cosas de la misma manera que como un propietario habitualmente diligente conserva las cosas que le pertenecen, ni en mayor ni en menor medida. Si el contrato de depósito implica una remuneración en beneficio del depositario como contrapartida de su obligación de conservación, es decir, cuando consista en un depósito oneroso, el artículo 1928 estipula que la disposición del artículo 1927 debe ser interpretada de forma más rigurosa. No se trata de hacer una valoración más estricta de la culpa. Simplemente, es el contenido de la obligación el que difiere. El depositario, en el caso del artículo 1928 debe hacer más de lo que debe hacer de aplicar el artículo 1927<sup>47</sup>. En definitiva, el principio según el cual la valoración de la culpa en el cumplimiento de la obligación de conservar una cosa debe realizarse *in abstracto*, está enunciado en el artículo 1137 del Código Civil. El criterio del buen padre de familia corresponde a una valoración *in abstracto*. Sin embargo, el artículo 1137 inciso segundo señala que “esta obligación es más o menos extensa dependiendo del contrato”. Se trata del contenido de la obligación y no de la valoración de la culpa. Los artículos 1927 y 1928 no son otra cosa más que aplicaciones de la distinción establecida en el artículo 1137 inciso 2°.

---

<sup>47</sup> Esta misma idea explica el artículo 1992 del Código Civil, relativo a la responsabilidad del mandatario. Ocurre de tal forma no porque la culpa del mandatario no remunerado sea apreciada de manera diferente a la del mandatario remunerado, sino porque la obligación del primero no tiene el mismo contenido que la del segundo, el cual para brindar satisfacción al mandante debe hacer más que el primero.

No existen razones para asociar a una obligación de medios la obligación contractual de origen externo relativa a “hacer todos los esfuerzos” para asegurar un resultado determinado. Esta obligación se asemeja a una obligación de medios. Sin embargo, obliga a más que esta última, y por eso mismo se acercaría más bien a una obligación de resultado (V. Caramalli, Remarques et mise en garde pour la rédaction des clauses de “meilleure diligence” (*best efforts*), *Petites Affiches* 11 de junio de 2003).

**21.- Las obligaciones de medios en la jurisprudencia.** De la misma forma que en lo que respecta a las obligaciones de resultado, encontramos obligaciones de medios en contratos de la más diversa índole, cuando originan obligaciones de hacer a la carga del deudor. En efecto, es sólo entre obligaciones de hacer que encontramos exclusivamente obligaciones de medios<sup>48</sup>.

En virtud de ciertas disposiciones del Código Civil, el deudor sólo puede ser responsable basándose en la culpa, probada o presunta. Tal es el caso respecto a la obligación de conservar una cosa en virtud del artículo 1137 del Código Civil, obligación que recae sobre el deudor en virtud de diversos contratos tales como el depósito (art. 1927 y 1928 C. civ.), la prenda (art. 2080 C. civ.), el arrendamiento (art. 1732 C. civ.)<sup>49</sup>, el préstamo (art. 1880 C. Civ.)<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> V. *infra*, n° 35 y s.

<sup>49</sup> El arrendador está también sujeto a una obligación de conservación (art. 1719-2° C. civ.), la que debe ser generalmente considerada como una obligación de medios, lo que no impide considerar que esté también sujeto a una obligación de resultado en lo que respecta a la entrega de la cosa arrendada (art. 1719-1° C. civ.) y en cuanto a la garantía de los vicios de ésta (art. 1721 C. civ., v. a propósito de una confusión entre la obligación de conservación, que es de medios, y la obligación de garantía por vicios ocultos, que es de resultado, Versalles 28 de septiembre de 1990, *J.C.P.* 1991.IV.123, fallo que fundando la responsabilidad en el artículo 1721 del Código Civil, concluye que hay incumplimiento a la obligación de conservación). Cuando el arrendatario es víctima de un daño causado por la cosa arrendada, debe probar que existe culpa en la conservación de la cosa o que la cosa tiene un vicio (cf. Civ. 3<sup>ra</sup>, 29 de abril de 1987, *J.C.P.* 1987.IV.221, el cual, a propósito del arriendo de un departamento amoblado revoca el fallo de una Corte de Apelaciones que determinó que existía responsabilidad del arrendador por la caída de un armario sobre el arrendatario que deseaba abrirlo, en virtud de que los jueces no constataron ningún vicio en la cosa arrendada ni falta alguna del arrendador en su obligación de conservación. V. también, Civ. 3<sup>ra</sup>, 21 de noviembre de 1990, *J.C.P.* 1991.IV.23, según el cual el arrendador no está sujeto a una obligación de resultado en cuanto a la seguridad del inquilino).

<sup>50</sup> Cuando a un contratista se le encarga mejorar, reparar, limpiar etc., una cosa, recae sobre él una obligación accesoria relativa a la conservación de la cosa (cf. París, 23 de septiembre de 1987, *D.*

1987.IR.221). A la luz del artículo 1137 del Código Civil, y salvo disposición legal especial en contrario, esta obligación debería ser sólo de medios (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 24 de marzo de 1993, *J.C.P.* 1993.IV.1354), aun cuando la culpa se presume (v. *infra*, n° 27). Por lo demás, el artículo 1789 del Código Civil al señalar que “el obrero es culpable” sólo cuando no proporciona el material, no hace más que retomar el principio afirmado en el artículo 1137. En consecuencia, no sólo no es responsable de la pérdida total o del deterioro por caso fortuito, sino que tampoco de lo que no se debe a culpa suya, aun cuando no concorra fuerza mayor (cf. a propósito de un empresario dedicado a las reparaciones, Civ. 3<sup>ra</sup>, 10 de enero de 1979, *D.* 1979.IR.248 y, a propósito de un tintorero, Civ. 1<sup>ra</sup>, 24 de marzo de 1987, *J.C.P.* 1987.IV.191, ambos fallos citando el art. 1789 C. civ; Civ. 1<sup>ro</sup>, 9 de junio de 1993, *J.C.P.* 1993.IV.2029, *Rev. trim. dr. civ.* 1993.828, obs. Jourdain, a propósito del dueño de un garaje; Civ. 3<sup>ra</sup>, 17 de febrero de 1999, *Contrats, conc. consom.* 1999, n° 67, obs. Leveneur, que revoca un fallo de una Corte de Apelaciones por haber violado el artículo 1789 C. civ, en un caso en que, con posterioridad a un incendio de un edificio en el que un técnico estaba instalando un radiador, la Corte rechazó la demanda reparatoria en su contra, toda vez que no se aportó la prueba que implicaba la intervención de un soplete, en circunstancia que no se percató que el técnico demostraba que el incendio se había producido sin mediar culpa suya). Si bien la obligación de conservar propiamente tal se desprende de los artículos 1137 y 1789, en tanto, la obligación de ejecutar el trabajo previsto, podría ser de resultado (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 3 de noviembre de 1970, *D.* 1971.226, Versalles 4 de marzo de 1993, *D.* 1993.IR.147, Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de octubre de 1997, *R.J.D.A.* 1998, n° 47 y Civ. 1<sup>ra</sup>, 14 de diciembre de 2004, *J.C.P.* 2005.IV.1220, a propósito del dueño de un garaje; París, 10 de abril de 1987, *D.* 1987.IR.132, a propósito de un tintorero; Com. 16 de marzo de 1999, *R.J.D.A.* 1999, n° 666, a propósito de la reparación de una máquina; Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de julio de 1999, *D.A.* 1999.1440, *R.J.D.A.* 1999, n° 1394) a propósito de la reparación de un ascensor. V. no obstante, Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de febrero de 1994, *R.J.D.A.* 1994, n° 285, *Contrats conc. consom.* 1994, n° 70, obs. Leveneur, *J.C.P.* 1994.II.22294, nota Delebecque, *Rev. trim. dr. civ.* 1994. 613, obs. Jourdain, Civ. 1<sup>ra</sup>, 20 de junio de 1995, *J.C.P.* 1995.IV.2010 y Com. 26 de abril de 2000, *R.J.D.A.* 2000, n° 858, fallos relativos al dueño de un garaje que señalan que la suya es una obligación de resultado, permitiéndole no obstante exonerarse de su responsabilidad probando ausencia de culpa, sin exigir la prueba de una causa inimputable, lo que es una contradicción. Comparar, Civ. 1<sup>ra</sup>, 14 de marzo de 1995, *R.J.D.A.* 1995, n° 1195, que deduce una obligación de resultado sancionada por una responsabilidad de pleno derecho, es decir, sin necesidad de culpa, precisando que le compete al cliente probar que el daño se originó en la parte que requería intervención del mecánico, en circunstancia que esta obligación sólo podía ser de medios (cf. Com. 20 de marzo de 1985, *Bull. civ.* 4, n° 105, *Rev. trim. dr. civ.* 1986.362, obs. Huet y Com. 13 de marzo de 1990, *J.C.P.* 1990.IV.185, a propósito de un restaurador; Civ. 1<sup>ra</sup>, 7 de febrero de 1978, *J.C.P.* 1978.IV.118, *Bull. civ.* 1, n° 46, Civ. 1<sup>ra</sup>, 20 de diciembre de 1993, *Bull. civ.* 1, n° 376, *D.* 1994.IR.28, *Rev. trim. dr. civ.* 1994.611, obs. Jourdain, y Civ. 1<sup>ra</sup>, 17 de noviembre de 1993, *Contrats, conc. consom.* 1994, n° 83, obs. Raymond, *Rev. trim. dr. civ.* 1994.611, obs. Jourdain, a propósito de un tintorero). Ciertamente no siempre es fácil trazar la frontera entre lo que se desprende de la obligación de conservar y la de cumplir el trabajo al que el arrendador de obra está sujeto. No obstante, no existen razones para hacer recaer sobre el constructor una obligación de resultado, mientras que la obligación de aquel que interviene sobre una cosa que le es encargada por el jefe de obra, sería solo de medios. La diferencia entre ambas situaciones sólo existe verdaderamente en lo que compete la obligación de conservar. En efecto, mientras que respecto al constructor, al menos si proporciona los materiales, es propietario de ellos hasta la entrega, lo que justifica que la pérdida de la cosa, incluso si se produjo por caso fortuito, sea de su responsabilidad (*res perit domino*, cf. art. 1788 C. civ.), aquel que realiza un trabajo sobre una cosa que no le pertenece, se erige como depositario, lo que conlleva a sujetarlo a una obligación de conservar que sólo puede ser de medios (art. 1789 C. civ.). De todas formas, la cuestión sobre la calificación de la obligación sólo se plantea, salvo en los casos en que la ley es imperativa, (cf. art. 1792 y s. C. civ.), en las situaciones en que las partes no caracterizaron la naturaleza de la obligación, en otras palabras, solamente a título supletorio de voluntad.

22.- Médicos. Existen otras obligaciones de medios aparte de las que consisten en conservar una cosa. Una de las aplicaciones más relevante radica en la obligación que recae sobre el médico en virtud de un contrato médico, a partir del fallo emblemático dictado por la Corte de Casación el 20 de mayo de 1936 (*D.P.* 1936.I.83, conclusiones Matter y análisis Josserand, *S.* 1937.1.321, nota Breton; Civ. 1<sup>ra</sup>, 28 de junio de 1989, *D.* 1989.IR.218, *J.C.P.* 1989.IV.331, que revoca un fallo de la Corte de Apelaciones que había expresamente sujetado al médico a una obligación de resultado<sup>51</sup> por una intervención banal y que no presentaba imprevistos)<sup>52</sup>, extendiéndose el mismo criterio al veterinario (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 31 de enero de 1989, *D.* 1989.IR.45, *J.C.P.*

---

<sup>51</sup> No deberíamos tomar al pie de la letra un fallo (Civ. 1<sup>ra</sup>, 7 de enero de 1997, *D.* 1997.189, análisis Sargo, nota Thouvenin) que revoca la decisión de una Corte de Apelaciones que había descartado la responsabilidad de un médico, argumentando que éste no había incurrido en un descuido culposos, siendo que las lesiones del paciente habían sido causadas por el cirujano, de manera que la responsabilidad de este último debía admitirse. En efecto, este fallo sólo concierne una cuestión de causalidad. En efecto, el médico había lesionado al paciente en el transcurso de una intervención quirúrgica.

<sup>52</sup> Sin embargo, no se excluye que el contrato pueda generar obligaciones de resultado, desde el momento en que éstas no dicen relación propiamente con la *lex artis*. Así, en un fallo del 1<sup>ro.</sup> de abril de 1968, la Corte de Casación (*D.* 1968.653, nota Savatier, *J.C.P.* 1968.II.15547, nota Rabut) coligió la responsabilidad sin culpa de un médico en un caso en que la explosión de un aparato anestésico generó la muerte del paciente. Ciertamente, la responsabilidad del médico hacia los parientes cercanos del enfermo que demandaban la reparación de perjuicio por rebote, consistía en este caso en responsabilidad extracontractual. Sin embargo, no sería lógico que la responsabilidad fuera objetiva sólo hacia los parientes cercanos. En lo relativo a los aparatos que el médico usa, hay que advertir una obligación de resultado a favor del cliente (cf. T.G.I., Pontoise, 28 de noviembre de 1986, *D.* 1987.317, nota Larroumet; París 12 de enero de 1989, *D.* 1989. Somm.317, obs. Penneau. V. también respecto al abastecimiento de los aparatos, Civ. 1<sup>ra</sup>, 22 de noviembre de 1994, *Bull. Civ.* 1, n° 340, *Rev. trim. dr. civ.* 1995.375, obs Jourdain). Es cierto que un fallo posterior, del 25 de mayo de 1971, rechazó admitir la responsabilidad objetiva del médico hacia los parientes cercanos del enfermo fallecido con posterioridad a la inyección de un producto (*D.* 1972.534, nota Penneau). Sin embargo, en este caso, el advenimiento del daño tenía su origen en un acto derivado de la *lex artis*, y tendría que haber sido vinculado al cumplimiento de una obligación de medios, considerando además que el vicio del producto inyectado, aunque no exista gracias a ello una condición de la responsabilidad sin culpa de quien lo utiliza, no había sido demostrado. Si del acto médico relativo a la instalación de una prótesis se deriva una obligación de medios (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de octubre de 1985, *D.* 1986.417, nota Penneau), el suministro mismo de la prótesis pareciera ser objeto de una obligación de resultado (Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de octubre de 1985, *D.* 1986.417, nota Penneau, *Rev. trim. dr. civ.* 1986.762, obs. Huet. V. también, París 8 de febrero de 1991, *J.C.P.* 1992.II.21788, nota Méméteau). Asimismo, una obligación a la cual el médico está sujeto y que según la jurisprudencia debemos considerar como de resultado, es la relativa a la restitución de los efectos del paciente (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 22 de noviembre de 1988, *J.C.P.*, 1989.IV.31, a propósito de una joya retenida en virtud de las necesidades de un examen radiológico, la cual, no habiendo sido devuelta inmediatamente después del examen, se extravió).

1989.IV.120) y a las clínicas (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de abril de 1995, *R.J.D.A.* 1995, n° 811, *J.C.P.* 1995.II.22467, nota Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 13 de noviembre de 1996, *D.* 1996.IR.268, respecto a una transfusión realizada con una sangre nociva, que funda la responsabilidad de la clínica en la culpa, suponiendo que ella tuvo la posibilidad de controlar la calidad de la sangre de la transfusión)<sup>53</sup>, aun cuando sobre estas últimas recaiga una obligación de seguridad de resultado en cuanto al abastecimiento de medicamentos y productos diversos a la sangre que proporciona al paciente en virtud de un contrato de hospitalización (Civ. 1<sup>ra</sup>, 7 de noviembre del 2000, *Bull. civ.* 1, n° 272, *Rev. trim. dr. civ.* 2001.151, obs. Jourdain)<sup>54</sup>.

**23.- Obligaciones de información y de consejo.** Al ser susceptibles de más o de menos dependiendo de las circunstancias, las obligaciones de información, consejo y referencia que recaen sobre un gran número de profesionales son obligaciones de medios. Así, numerosas sentencias judiciales relativas a vendedores, contratistas, notarios, banqueros, agentes inmobiliarios, administradores de bienes y otros agentes de negocios son cautelosas en admitir, cada vez, culpa en contra del deudor de una obligación de este tipo. No obstante, para saber si se incurrió en culpa, es necesario determinar cual es el contenido exacto de la obligación de información o consejo. Este contenido varía para un mismo profesional de una obligación a otra. Esto explica que las sentencias desarrollen siempre las circunstancias de cada caso, para admitir, o al contrario, descartar el incumplimiento culposo de la obligación (cf. a propósito de un perito en contabilidad, Com. 2 de junio de 1987, *D.* 1987.IR.146 y París, 30 de abril de 1987, *D.*

---

<sup>53</sup> Al contrario, los centros de transfusión sanguínea están obligados a proporcionar sangre libre de vicios, lo que constituye una obligación de resultado (Civ. 1<sup>ro</sup>, 12 de abril de 1995, *J.C.P.* 1995.II.22467, nota Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de julio de 1996, *D.* 1996.610, nota Lambert-Faivre).

<sup>54</sup> No entendemos porqué en lo que compete a las clínicas, en lo relativo al suministro de sangre, se puede desprender una obligación de medios, en tanto que en lo que concierne a otros productos existe una obligación de resultado.

<sup>64</sup> V. *supra*, n° 14.



1987.IR.140; a propósito de una asesoría en organización, París, 22 de enero de 1990, *D.* 1990.IR.50; a propósito de una asesoría en un proceso de contratación, París, 11 de enero de 1990, *D.* 1990.IR.54; a propósito de una empresa de trabajo temporal, Civ. 1<sup>ra</sup>, 26 de febrero de 1991, *D.* 1991.605, nota Lapoyade-Deschamps).

**24.- Obligaciones de seguridad.** Si la jurisprudencia ha incluido en múltiples contratos obligaciones de información y de consejo, en hipótesis en que éstas no necesariamente corresponden a la voluntad de las partes, sino que se desprenden más bien de la economía del contrato, objetivamente apreciadas en función al artículo 1135 del Código Civil, la jurisprudencia ha procedido de la misma manera en lo que concierne a la obligación de seguridad, respecto de la cual el deudor está obligado a proteger la integridad corporal del acreedor. Ciertamente, algunas obligaciones de seguridad son según la jurisprudencia<sup>55</sup> obligaciones de resultado. Pero, en otros contratos, la obligación de seguridad es sólo de medios. Así sucede en lo relativo a la obligación que la jurisprudencia ha establecido respecto a los hoteleros y dueños de restaurantes (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 7 de octubre de 1981, *J.C.P.* 1981.IV.401, *D.* 1982.IR.88; Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de junio de 1982, *J.C.P.* 1982.IV.287, *D.* 1982.IR.429; Civ. 1<sup>ra</sup>, 19 de julio de 1983, *J.C.P.* 1983.IV.317, *Rev. trim. dr civ.* 1984.729, obs. Huet; Civ. 29 de enero de 1985, *J.C.P.* 1985.IV.138; Civ. 1<sup>ra</sup>, 14 de mayo de 1995, *R.J.D.A.* 1995, n° 930; Rouen 24 de octubre de 2001, *R.J.D.A.* 2002, n° 443. V. también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de junio de 1981, *D.* 1981.IR.406, *J.C.P.* 1982.II.19911, nota Dejean de la Batie, en lo relativo a la obligación del dueño de un

---

<sup>55</sup> V. *supra*, n° 14.

restaurante de poner a disposición de sus clientes asientos lo suficientemente sólidos)<sup>56</sup>.

Las compañías de espectáculos y los organizadores de eventos deportivos, artísticos u otros, están sujetos a una obligación de seguridad hacia los espectadores (cf. T.G.I., Le Mans, 9 de noviembre de 1982, *D.* 1983.128, nota Le Tourneau; París, 13 de marzo de 1986, *D.* 1986, Flash n°14)<sup>57</sup> y hacia los participantes del espectáculo o del evento (cf. Civ. 2<sup>da</sup>, 24 de marzo de 1980, *J.C.P.* 1980.IV.225; Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de octubre de 1979, *J.C.P.* 1979.IV.371, *D.* 1980.IR.260; Civ. 1<sup>ra</sup> 16 de diciembre de 1997, *J.C.P.* 1998.IV.1350)<sup>58</sup>. De la misma forma, el encargado de un parque de diversiones para niños sólo está sujeto a una obligación de medios (Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de noviembre de 1976, *J.C.P.* 1976.IV.395, *D.* 1977.IR.31; Montpellier 20 de enero de 1992, *J.C.P.* 1993.II.22125, nota Bories)<sup>59</sup>, asimismo ocurre con el de una playa, de una piscina, de un terreno para el camping o de una cueva (cf. Trib. inst. Arcachon, 17 de enero de 1975, *D.* 1976.506, nota Bihl; Civ. 1<sup>ra</sup>, 27 de febrero de 1977, *J.C.P.* 1977.IV.105; Civ. 23 de noviembre de 1977, *J.C.P.* 1978.IV.30; Civ. 1<sup>ra</sup>, 18 de diciembre de 1985, *J.C.P.* 1986.IV.81; Civ. 1<sup>ra</sup> 17 de junio de 1997, *R.J.D.A.* 1998, n°13) o aquel de un parque zoológico (Civ. 1<sup>ra</sup>, 30 de marzo de 1994, *R.J.D.A.* 1994, n° 999) o de un centro de estética (Civ. 1<sup>ra</sup>, 8 de diciembre de 1998,

<sup>56</sup> Comparar *supra*, n° 13, en lo que concierne a la obligación del hotelero como depositario. Sin embargo, la obligación del dueño de un restaurante al operar como depositario es sólo una obligación de medios (cf. París, 20 de marzo de 1987, *D.* 1987.IR.115), v. *infra*, n° 27.

<sup>57</sup> Se debe sin lugar a dudas a su calidad de organizador de un desfile que la Corte de Casación responsabilizó a la escuela militar con una obligación de medios respecto a la visita de unos niños al recinto militar, usando un transporte en el cual visitaban el lugar y no con la obligación de resultado que recae normalmente sobre el transportista (Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de mayo de 1984, *J.C.P.* 1984.IV.239, *Bull. civ.* 1<sup>ra</sup>, n° 163, *Rev.trim.dr.civ.* 1985.389, obs. Huet).

<sup>58</sup> Alguna vez se admitió que independiente de la obligación de seguridad, el organizador de espectáculos estaría sujeto a una obligación de diligencia en lo que respecta a la satisfacción de los espectadores, en cuanto a la calidad del espectáculo (T.G.I. Limoges 28 de marzo de 1991, *D.* 1992. Somm. 270, obs. Fortis), lo cual podría admitirse al estimar que los espectadores tienen derecho a exigir un mínimo esfuerzo por parte del organizador.

<sup>59</sup> Comparar *supra*, n° 14, en lo que concierne al dueño de un carrusel o de un columpio, quien está sujeto a una obligación de resultado. El dueño de una pista de karting está sujeto a una obligación de seguridad que es simplemente de medios (Civ. 1<sup>ra</sup>, 1ro. de diciembre de 1999, *D.* 2000.287, nota Mouly).



*D.A.* 1999.205, *R.J.D.A.* 1999, n° 233, *D.* 1999. *Somm.* 260, obs. Jourdain). Asimismo ocurre con las asociaciones deportivas y los establecimientos escolares, que deben tomar medidas de seguridad hacia sus adherentes o alumnos incluso en ausencia de una obligación legal (cf. París, 17 de junio de 1987, *D.* 1987.IR.176, a propósito de una asociación deportiva, y 22 de junio de 1987, *D.* 1987.IR.177, en relación con un establecimiento escolar).

El organizador de paseos a caballo, al igual que un club ecuestre, sólo está sujeto a una obligación de medios en lo que respecta la seguridad de sus clientes (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 12 de febrero de 1980, *J.C.P.* 1980.IV.168; Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de marzo de 1980, *J.C.P.* 1980.IV.197, *Rev. trim. dr. civ.* 1980.769, obs. Durry; Versailles, 10 de noviembre de 1988, *D.* 1989.IR.24; Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de junio de 1994, *R.J.D.A.* 1994, n° 1107; Chambéry 31 de mayo de 2000, *J.C.P.* 2000.IV.2773). El alquilador de caballos está también sujeto a una obligación de medios, pero la Corte de Casación considera que su obligación es menos estricta que la que recae sobre el organizador de paseos a caballo. Los clientes esperan menos de un alquilador que de un organizador (cf. París, 3 de febrero de 1982, *D.* 1984.IR.186, obs. Wagner; Civ. 1<sup>ra</sup>, 27 de marzo de 1985, *J.C.P.* 1985.IV.208, *Bull. civ.* 1<sup>ra</sup>, n° 111; Civ. 1<sup>ra</sup>, 11 de marzo 1986, *Bull. civ.*, n° 64, *J.C.P.* 1986.IV.146, *Rev. trim. dr. civ.* 1986.608, obs. Rémy y 768, obs. Huet, *D.* 1987. *Somm.* 467, obs. Wagner; Civ. 1<sup>ra</sup>, 3 de mayo de 1988, *J.C.P.* 1988.IV.239)<sup>60</sup>. Esporádicamente se ha admitido una obligación de medios respecto a un encargado de un almacén (Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de noviembre de 1976, *J.C.P.* 1977.IV.3, *D.* 1977.IR.87, *Rev. trim. dr. civ.* 1977.323, obs. Durry)<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Si bien la obligación de medios, a diferencia de la obligación de resultado, es susceptible de más o de menos, de donde se deduce que sea posible exigirle más a un organizador de paseos a caballo que a un alquilador, esto no obsta a que sería ciertamente más satisfactorio considerar al organizador de paseos a caballo como transportista, para así sujetarlo a una obligación de resultado.

<sup>61</sup> Es cierto que ciertas decisiones admitieron algunas veces una obligación de resultado en contra del encargado de una tienda (cf. T.G.I. Laon 29 de noviembre de 1977, *D.* 1978.IR.208, obs. Larroumet). Especialmente, podemos preguntarnos si una obligación de seguridad implícita, sea de medios o de resultado, se desprende de la economía del contrato. Es la razón por la que otras resoluciones prefirieron admitir que la responsabilidad del dueño de un almacén sólo podía admitirse en sede

Independiente de la obligación de resultado relativa a ejecutar el trabajo encomendado y a la que consiste en conservar la cosa entregada con el fin de repararla, la que, en principio, es una obligación de medios, la jurisprudencia sujeta al restaurador y, particularmente, al mecánico, a una obligación de seguridad consistente en restituir a su cliente una cosa que ofrezca una seguridad suficiente (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de junio de 1993, *D.* 1993.IR.178, a propósito del dueño de un garaje). Sin embargo, nos podemos preguntar en qué medida esta obligación es independiente a la de ejecutar el trabajo prometido, ya que al igual que ésta, no serían más que de medios (Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de junio de 1993, ya citado). La Corte de Casación impuso también al arrendador de obra una obligación de seguridad que es simplemente de medios, en beneficio de la contraparte que participa en la obra (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 24 de noviembre de 1993, *D.* 1994.IR.11, a propósito de la botadura de un barco realizado por un camión). Incluir tal obligación en un contrato de arrendamiento de obras y servicios tiene por objeto, a primera vista, impedir a la contraparte del arrendador de obra recurrir a la responsabilidad extracontractual objetiva del artículo 1384, inciso 1<sup>ro</sup>. del Código Civil en caso de sobrevenir daño corporal. No obstante, esto sería, salvo de aceptar los riesgos, la única solución lógica, siendo una obligación de seguridad corporal ajena al objeto del contrato<sup>62</sup>.

**25.- Agencias de viajes.** Al ser mandatarias, las agencias de viajes sólo responden por culpa, culpa que debe ser probada por sus clientes (cf. art. 1992 C. civ. v. Civ. 1<sup>ra</sup>, 30 de enero de 2007, *D.* 2007.2374, nota Dagorne-Labbé, a propósito de la devolución de un pasaje por cuenta del

---

extracontractual (cf. Civ. 2<sup>da</sup>, 5 de junio de 1991, *D.* 1991.IR.199, *J.C.P.* 1991.IV.308, respecto al principio de la responsabilidad extracontractual del dueño de una tienda de libre acceso, a propósito del funcionamiento defectuoso de un sistema de detección electrónico. V. también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de mayo de 1996, *R.J.D.A.* 1996, n° 1408, *Rev. trim. dr. civ.* 1997.140, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de julio de 2002, *D.* 2002.IR.2517, Civ. 2<sup>da</sup>, 11 de julio de 2002, *R.J.D.A.* 2003, n° 90). Consistirá por tanto, según el caso, ya sea de responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas, la que es la contrapartida en sede extracontractual de la responsabilidad por incumplimiento de una obligación de resultado, o bien de responsabilidad por culpa del artículo 1382 del Código Civil, que es contrapartida de la responsabilidad por incumplimiento de una obligación de medios.

<sup>62</sup> Comparar *supra*, nota n° 30, a propósito de los accidentes que acontecen en las estaciones de trenes.

transportista)<sup>63</sup>. No obstante, la jurisprudencia califica con bastante rigor el contenido de su obligación, y no duda en reprocharles haber desconocido de forma culposa la obligación, lo que la ubica al límite de una obligación de seguridad que sería de resultado (cf. específicamente Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de junio de 1976, *D.* 1976. Somm. 77, *J.C.P.* 1978.II.18995, nota Chemel, a propósito de una agencia de viajes que había omitido informar a su cliente que el lugar de vacaciones propuesto se encontraba próximo de una vía ferroviaria, y en la que el hijo de su cliente sufrió lesiones; Civ. 1<sup>ra</sup>, 3 de mayo de 1977, *J.C.P.* 1977.IV.165, *D.* 1977.IR.415, a propósito de una excursión en una zona de napas subterráneas de agua caliente, en que la culpa consistió en no haber contemplado la presencia de un guía).

Más específicamente, la jurisprudencia ha admitido responsabilidad de una agencia de viajes por incumplir una “obligación de vigilancia” respecto al transportista escogido por ésta, y que incurrió en culpa (Civ. 1<sup>ra</sup>, 23 de febrero de 1983, *J.C.P.* 1983.II.19967, conclusiones Gulphe, *D.* 1984.481, nota Couvrat, *Rev. trim. dr. civ.* 1983.322, obs. Durry; Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de enero de 1991, *D.* 1992.435, nota Diener; París, 14 de marzo de 1997, *D.* 1998.7, nota Dagorne-Labbé), por no haber verificado que el hotel en el cual había hecho las reservas para sus clientes era seguro, y resultando los clientes con lesiones en un incendio del hotel (T.G.I. París, 2 de julio de 1976, *J.C.P.* 1977.IV.190 v. también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 3 de mayo de 2000, *D.* 2000.IR.160, *R.J.D.A.* 2001, n° 127, a propósito del desperfecto del ascensor de un hotel) o incluso a raíz de una enfermedad contraída por un cliente que bebió agua no potable suministrada por el prestador de servicios contratado por la agencia de viajes

---

<sup>63</sup> La responsabilidad establecida en el artículo 1992 del Código Civil relativo a los mandatarios está sin duda fundada en la culpa. Sin embargo, han existido resoluciones que han sujetado al mandatario a presunciones de responsabilidad, presunciones sólo factibles de destruir probando una causa inimputable (cf. Dijon 17 de febrero de 1994, *J.C.P.* 1994.IV.1705), lo que revela una obligación de resultado, manifiestamente contraria al artículo 1992. La Corte de Casación deja entrever que la obligación del mandatario consistente en cumplir el negocio que le fue confiado puede ser de resultado (v. Com. 7 de octubre de 1997, *D.A.* 1997.1278, *R.J.D.A.* 1997, n° 1499, *Contrats, conc. consomm.* 1998, n° 3, obs. Leveneur, fallo en el que la Corte insiste en el carácter aleatorio de la venta de títulos delegados a una sociedad bursátil para sujetarla simplemente a una obligación de medios, de lo cual se sigue que es el mandante quien debe probar la culpa del mandatario en el cumplimiento de su gestión).

(París 12 de junio de 1997, *D.* 1998.252, nota Dagorne-Labbé). Sobre todo en el primer caso, nos encontramos al límite de una obligación de resultado en lo relativo a la seguridad de sus clientes (cf. no obstante respecto a una rigurosidad menor, París, 3 de abril de 1987, *D.* 1987.IR.114; Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de mayo de 1990, *D.* 1990.IR.151)<sup>64</sup>. Por lo demás, la obligación de informarse en cuanto a la seguridad o bien, aquella que se refiere a tomar la precaución de convenir una garantía que beneficie a otro, no es exclusiva a las agencias de viajes, y la jurisprudencia ha admitido culpas similares en contra de organizadores de eventos deportivos en cuanto a la seguridad de los participantes (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de abril de 1976, *D.* 1976.514, nota Chirez; Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de abril de 1978, *J.C.P.* 1978.IV.188, *D.* 1979.IR.314, obs. Alaphilippe y Karaquillo).

Aquí también, tal como en las obligaciones de resultado, se trata sólo de algunos de los ejemplos más significativos, extraídos de la jurisprudencia. Un buen número de obligaciones de medios, especialmente las referidas a la seguridad del acreedor, lograron consagrarse a partir de la obligación de los instructores de esquí y de otros deportes (cf. Chambéry, 20 de enero

---

<sup>64</sup> Se admitió en contra de las agencias de viajes la existencia de una obligación de resultado en beneficio de los clientes que se inscriben en viajes organizados (Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de noviembre de 2005, *D.* 2006.1016, nota Maréchal, *J.C.P.* 2006.II.10018, nota Poumarède; Civ. 1<sup>ra</sup>, 13 de diciembre de 2005, *B. civ.* 1, n° 504, *Rev. trim. dr. civ.* 2006.329, obs. Jourdain) ; París, 9 de febrero de 1988, *D.* 1988.IR.73), obligación que asimila la agencia de viajes a un vendedor, lo que es completamente discutible, ya que cuando la agencia no actúa como un mandatario de su cliente, se trata de un arrendamiento de servicios. Sin tomar partido respecto a la naturaleza de la obligación de una agencia de viajes en cuanto a la organización de un viaje o de una estadía, la Corte de Casación consideró que, al ser garantes de las empresas prestadoras de servicios a las que subcontrató, la agencia de viajes está sujeta a la misma responsabilidad que estos últimos, habiéndose dictado esta resolución a propósito de la pérdida de equipaje durante una operación de transporte aéreo (Civ. 1<sup>ra</sup>, 10 de mayo 1989, *D.* 1989.IR.171, *J.C.P.*, 1989.IV.258 y Colmar, 24 de mayo de 2006, *J.C.P.* 2006.IV.2960. V. también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de mayo de 1990, *J.C.P.* 1990.IV.270; Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de enero de 1991, *D.* 1992.242, nota Dagorne-Labbé, *D.* 1992.435, nota Diener; Limoges 8 de octubre de 1992, *J.C.P.* 1993.IV.1040; París, 12 de junio de 1989, *D.* 1989.IR.212; París, 19 de septiembre de 1989, *D.* 1989.IR.249; París 28 de noviembre de 1990, *D.* 1991.IR.20; París 29 de octubre de 1991, *D.* 1991.IR.276). En realidad, la obligación es, en este caso, una obligación de resultado. En lo relativo a la prueba del incumplimiento de las obligaciones de una agencia de viajes, se admitió que ésta podía elaborarse a partir de la aproximación, por un lado, de la descripción de la publicidad contenida en el contrato y por otro lado, de las deficiencias admitidas por la agencia. (cf. París, 23 de noviembre de 1988, *D.* 1989.IR.9). Sobre la responsabilidad de las agencias de viajes, v. Batteur, De la responsabilité des agences de voyages organisés: vers un cas autonome de responsabilité contractuelle du fait d'autrui, *J.C.P.* 1992, ed. E.I.131.

de 1976, *D.* 1977.209, nota Rabinovitch; Chambéry, 6 de junio de 1978, *J.C.P.* 1980.II.19386, nota Sarraz-Bournet; Civ. 1<sup>ra</sup>, 28 de abril de 1980, *J.C.P.* 1980.IV.262; Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de febrero de 1994, *J.C.P.* 1994.II.22313, nota Veaux; Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de octubre de 2001, *J.C.P.* 2002.II.10194, nota Lièvremont, *Contrats, conc. consomm.* 2002, n° 21, obs. Leveneur, *Rev. trim. dr. civ.* 2002.107, obs. Jourdain), pasando por las personas o los establecimientos encargados de la guarda de niños (Civ. 1<sup>ra</sup>, 13 de febrero de 1979, *D.* 1979.IR.302; Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de noviembre de 1982, *J.C.P.* 1983.IV.27, *Rev. trim. dr. civ.* 1983.546, obs. Durry; Civ. 1<sup>ra</sup>, 10 de febrero de 1993, *D.* 1993.605, nota Bonnard y Civ. 1<sup>ra</sup>, 11 de marzo de 1997, *Bull. civ.* 1, n° 89, *Rev. trim. dr. civ.* 1997.947, obs. Jourdain, a propósito de un campamento de verano) y las clínicas psiquiátricas (cf. entre muchas decisiones, Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de noviembre de 1976, *J.C.P.* 1977.IV.3, *D.* 1977.IR.64) hasta el contrato relativo al adiestramiento de caballos (Civ. 1<sup>ra</sup>, 5 de abril de 1980, *D.* 1980.IR.372, *J.C.P.* 1980.II.19402, nota Bénabent. Cf. también, Civ. 1<sup>ra</sup>, 13 de diciembre de 1988, *D.* 1989.IR.7, *J.C.P.* 1989.IV.63, a propósito del entrenamiento de un caballo) y aquel contrato de presentación en virtud del cual una empresa se encarga de buscar y presentar a otra un candidato para un puesto directivo (Versalles, 3 de marzo de 1988, *J.C.P.* 1988.II.21132, nota Estoup) o bien, en primer lugar, el arrendador de un local comercial en una galería en cuanto a la frecuencia de la clientela (París 7 de octubre de 1998, *D.A.* 1998.1843, fallo que considera que está obligado a poner en práctica la política de arrendamiento prometida y no alterarla en su sólo beneficio, perjudicando al arrendatario) y, en segundo lugar, el instalador de un sistema láser numérico (Toulouse 25 de enero de 2001, *J.C.P.* 2001.IV.2076).

β) La carga de la prueba de la culpa

26.- **Derecho común.** En el cumplimiento de una obligación de medios, la carga respecto a la prueba de la culpa es un asunto de primera importancia. En efecto, si la prueba recae en el demandante, es decir, en el acreedor de la obligación, le competirá, en todos los casos dudosos, esto es, aquellos en que no es evidente que el deudor incurrió en culpa, soportar las consecuencias del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto de la obligación. Al contrario, si admitimos la existencia de una presunción de culpa, corresponde al deudor contra el cual el acreedor invoca la presunción, soportar todos los casos dudosos cuando no esté facultado para probar la ausencia de culpa en el cumplimiento de su obligación.

Previo a la ley del 10 de julio del año 2000, la jurisprudencia igualaba la culpa penal y la culpa civil delictual no voluntaria, es decir, aquella culpa que permite deducir la responsabilidad extracontractual de su autor fundándose en el artículo 1383 del Código Civil (cf. Civ. 18 de diciembre de 1912, *D.* 1915.1.17, *S.* 1914.1.249, nota Morel). Esto se producía en virtud de que la sentencia absolutoria en materia penal prohibía admitir la responsabilidad civil emanada del artículo 1383. No obstante, al tener la culpa contractual una naturaleza diferente a la culpa delictual, no era posible igualarla con la culpa penal (v. también, art. 470- C. proc. Pén.), pese a existir algunas decisiones más recientes que admitieron que la cosa juzgada en lo relativo a la culpa penal se aplicaba a la culpa contractual (Civ. 9 de junio de 1993, *D.* 1993.IR.178, a propósito de una sentencia absolutoria en materia penal que no permitió admitir la responsabilidad contractual por culpa). A partir de una ley del 10 de julio del 2000 (art. 4-1 C. pén.), la culpa civil delictual de imprudencia contemplada en el artículo 1383 del Código Civil es independiente de la culpa penal, en el sentido de que la sentencia absolutoria que estima la ausencia de culpa penal ya no obsta a que se advierta la existencia de culpa civil delictual (V. Civ. 1<sup>ra</sup>, 30 de enero de 2001, *D.* 2001.IR.677, fallo que afirma la falta de autoridad de la cosa juzgada en sede penal respecto de la culpa tratada en el artículo 1383 C. Civ.). Es evidente que el mismo régimen se debiera aplicar a la culpa contractual.

Conviene no confundir la presunción de culpa con la obligación de resultado. En efecto, el deudor de una obligación de resultado, en caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial, sólo puede exonerarse de su responsabilidad probando una causa inimputable, es decir, demostrando la inexistencia de relación de causalidad entre el hecho y el daño padecido por el acreedor<sup>65</sup>. Incluso cuando, en ciertos casos, la prueba de una causa inimputable concuerde con la ausencia de culpa del deudor, la prueba se referirá sólo a la causalidad y no a los elementos que admitan un juicio de valor sobre la conducta del deudor. Consiste en una prueba positiva de la causa del daño, causa que debe ser extraña a la actividad del deudor. Al contrario, la prueba de la ausencia de culpa y, en consecuencia, el derrumbamiento de la presunción de culpa consiste en una prueba negativa, la cual supone que el deudor se funda en elementos y en circunstancias que permiten considerar que su conducta es irreprochable.

Conforme al derecho común respecto a la carga de la prueba, se debe admitir que compete al acreedor probar la culpa del deudor que produce el incumplimiento de la obligación (*actori incumbit probatio*). Esta es la solución admitida a priori por la jurisprudencia en lo que se refiere a las obligaciones de medios. En la gran mayoría de estas obligaciones, la responsabilidad del deudor no se admitirá si el acreedor no prueba que el deudor incurrió en culpa (cf. por ejemplo, París, 11 de marzo de 1988, *D.* 1988.IR.113, a propósito de un mandatario; Civ. 1<sup>ra</sup>, 19 de julio de 1988, *J.C.P.* 1988.IV.349, *Bull. civ.* 1, n° 251, *D.* 1989. Somm. 405, obs. Karaquillo, a propósito de un club deportivo; Civ. 1<sup>ra</sup>, 18 de diciembre de 1990, *J.C.P.* 1991.IV.68, a propósito de un arrendamiento de obras y servicios; Civ. 1<sup>re</sup>, 16 de marzo de 1994, *R.J.D.A.* 1994, n° 909, fallo según el cual la responsabilidad de un comité de un establecimiento que había propuesto un viaje actuando como intermediario de una agencia de viajes, no puede admitirse sin existir la prueba de culpa en su contra, en circunstancia de que el viaje no pudo realizarse debido a la liquidación judicial de la agencia de viajes). La decisión es perfectamente lógica.

---

<sup>65</sup> V. *supra*, n° 9 y 11.



En efecto, si el acreedor no obtuvo satisfacción, en el sentido de que el resultado que quería obtener no se alcanza, no es posible fundarse sólo sobre ese hecho para admitir la responsabilidad del deudor. La responsabilidad no supone simplemente que el resultado no sea obtenido debido a una causa imputable al deudor, sino que debe fundarse en la circunstancia de que el deudor no se valió de todos los medios necesarios para alcanzar ese resultado. En consecuencia, es necesario probar que el deudor no hizo lo necesario para procurar satisfacción al acreedor. No obstante lo anterior, si bien la prueba de la culpa consiste en una prueba positiva, que supone una apreciación de la conducta del deudor cuando el acreedor no ha obtenido satisfacción, la existencia de la culpa puede admitirse a partir de la inexistencia de otra causa posible del daño (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 17 de noviembre de 1993, *Contrats, conc. consomm.* 1994, n° 83, obs. Raymond, a propósito de un tintorero, sujeto a una obligación de medios, que había devuelto a su cliente una vestimenta en mal estado, hecho que sólo podía deberse a su culpa, ya que, por un lado, no había estipulado ninguna reserva luego de la entrega de la vestimenta por el cumplimiento de su trabajo, y por otro lado, el mal estado no podía resultar de ninguna otra circunstancia, lo que implicaba necesariamente la culpa del tintorero).

**27.- Presunción de culpa.** Tanto la ley como la jurisprudencia admiten en ciertas situaciones, la existencia de una presunción de culpa en contra del deudor de una obligación de medios.

Así, el transportista aéreo, contrariamente al transportista terrestre, no siempre está sujeto a una obligación de resultado. En virtud del Reglamento Europeo del 9 de octubre de 1997 y de la Convención de Montreal del 28 de mayo de 1999<sup>66</sup>, la obligación es de resultado en la medida en que los perjuicios no sobrepasen el monto de cierto límite. Sin embargo, ya sea en los casos en que estos textos no son aplicables, o bien cuando el daño es superior al tope previsto, la obligación es sólo de

---

<sup>66</sup> V. *supra*, n° 14.

medios<sup>67</sup> (artículo 20 de la Convención de Varsovia del 12 de octubre de 1929)<sup>68</sup>. En virtud de esta disposición, no es deber de la víctima probar la culpa del transportista. Radica en este último demostrar que no incurrió en culpa<sup>69y70</sup>.

En cuanto a la obligación de medios relativa a la conservación de una cosa, la jurisprudencia ha admitido la existencia de una presunción de culpa en contra del deudor. Así sucede en lo que respecta al depositario. Al existir una presunción de culpa en contra del depositario, no compete al depositante probar su culpa, y en consecuencia será el depositario quien deberá demostrar la ausencia de culpa en la guarda de la cosa que le fue confiada (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 28 de mayo de 1984, *J.C.P.* 1984.IV.252; Civ. 1<sup>ra</sup>, 2 de octubre de 1980, *J.C.P.* 1980.IV.404, *D.* 1981.IR.68, *Rev. trim. dr. civ.* 1981.405, obs. Cornu; Civ. 1<sup>ra</sup>, 24 de junio de 1981, *D.* 1981.IR.394, *J.C.P.* 1981.IV.328, *D.* 1982.IR.363, obs. Larroumet, *Rev.*

---

<sup>67</sup> El fundamento era válido al momento en que aparecieron los transportes aéreos, época en la cual se concluyó la Convención de Varsovia sobre transporte aéreo, en 1929. Lo era asimismo, cuando esta Convención fue modificada por el Protocolo de la Haya en 1955. Este fundamento ya no es válido hoy en día, lo cual permite entender no sólo las disposiciones del reglamento europeo de 1997, sino también que las modificaciones posteriores sujeten al transportista aéreo a una obligación de resultado en cuanto a la seguridad de las personas transportadas.

<sup>68</sup> Para los transportes aéreos locales, en el derecho francés es pertinente tener en cuenta las disposiciones del Reglamento Europeo del 9 de octubre de 1997.

<sup>69</sup> Independiente del accidente de transporte propiamente tal, existe responsabilidad por culpa probada cuando el transportista tomó el riesgo de aterrizar en un país donde la guerra era inminente (Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de julio de 1999, *D.A.* 1999.1239). En cuanto al retraso, éste se desprende de los artículos 19 y 20 de la Convención de Varsovia (París 28 de junio de 2002, *J.C.P.* 2003.IV.1481). La Convención de Montreal mantiene el sistema, salvo en lo relativo a admitir un tope en la indemnización.

<sup>70</sup> En lo que respecta al transporte marítimo de personas, la obligación de seguridad del transportista en cuanto a la integridad corporal del pasajero es también una obligación de medios. Sin embargo, no siempre existe una presunción de culpa en contra del transportista. Para los transportes sujetos a la ley francesa, la ley del 18 de junio de 1966 relativa a los contratos de fletamento y de transporte marítimo, establece que la culpa debe ser probada por la víctima (art. 37). No obstante, cuando el daño corporal se produce por un siniestro extraordinario, tal como lo es un incendio, un naufragio, una explosión etc., el artículo 38 establece una presunción de culpa en contra del transportista, la cual, tal como sucede para los transportes aéreos, se altera por la prueba de la ausencia de culpa. Aquí también, en consecuencia, no se trataría de una obligación de resultado donde el transportista lograría exonerarse sólo probando una causa inimputable. Al contrario, el organizador de un crucero marítimo está sujeto a una obligación de resultado, salvo en lo que concierne a la integridad corporal del pasajero durante la fase del transporte marítimo propiamente tal, caso en el cual su responsabilidad corresponde a la de un transportista marítimo sujeto a una obligación de medios (art. 48 y 49 de la ley del 18 de junio de 1966). La ley del 18 de junio de 1966 considera que el transportista marítimo de mercancías está, en principio, subordinado a una obligación de resultado, y siempre que no haya incurrido en culpa, no puede sino exonerarse de su responsabilidad a través de la prueba de "casos excepcionales", los cuales están limitativamente estipulados en la ley (art. 27 de la ley del 18 de junio de 1966).

*trim. dr. civ.* 1982.430, obs. Cornu; París, 20 de marzo de 1987, *D.* 1987.IR.99; Com. 22 de noviembre de 1988, *J.C.P.* 1989.IV.29, *Bull. civ.* 4, n° 316, *Rev. trim. dr. civ.* 1989.328, obs. Jourdain; Civ. 1<sup>ra</sup>, 4 de octubre de 1989, *D.* 1989.IR.262, *J.C.P.* 1989.IV.385; Civ. 1<sup>ra</sup>, 10 de enero de 1990, *D.* 1990.IR.30, *J.C.P.* 1990.IV.93, *Bull. civ.* 1<sup>ra</sup>, n° 6, *Rev. trim. dr. civ.* 1990.517, obs. Rémy; Civ. 1<sup>ra</sup>, 24 de febrero de 1993, *Contrats, conc. consom.* 1993, n° 89, obs. Leveneur; Civ. 1<sup>ra</sup>, 20 de julio de 1994, *D.* 1994.IR.225, *J.C.P.* 1994.IV.2342; Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 de mayo de 1996, *R.J.D.A.* 1996, n° 1183; Civ. 1<sup>ra</sup>, 15 de enero de 1999, *R.J.D.A.* 1999, n° 546; Civ. 1<sup>ra</sup>, 30 de marzo de 2005, *J.C.P.* 2005.IV.2124). La decisión debe extenderse, en virtud de la similitud de situaciones, al dueño de un garaje (Civ. 1<sup>ra</sup>, 29 abril de 1985, *J.C.P.* 1985.IV.243; París, 23 de septiembre de 1987, *D.* 1987.IR.221; París, 15 de septiembre de 1989, *D.* 1989.IR.252)<sup>71</sup> o incluso al comprador a quien la cosa le fue entregada, pero que en virtud de una cláusula de reserva de dominio, el vendedor sigue siendo el propietario hasta el pago del precio (Com. 19 de octubre de 1982, *Bull. civ.* 4, n° 321, *Rev. trim. dr. civ.* 1984.515, obs. Huet)<sup>72</sup>. La jurisprudencia la ha extendido también al arrendador de obra cuando la cosa sobre la cual interviene le es proporcionada por el dueño de la obra (art. 1789 C. civ. Cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 14 de mayo de 1991, *J.C.P.* 1991.IV.263; Civ. 3<sup>ra</sup>, 17 de febrero de 1999, *Bull. civ.* 3, n° 41, *J.C.P.* 1999.IV.1658, *Rev. trim. dr. civ.* 1999.629, obs. Jourdain). En esta hipótesis, la situación del arrendador de obra se asemeja a la del depositario (v. Caen 8 de julio de 1993, *J.C.P.* 1993.IV.2479, fallo que admite que existe un depósito accesorio al contrato de entrenamiento de un caballo, de donde se colige que en caso de deceso

<sup>71</sup> La obligación de seguridad a la cual la jurisprudencia sujeta al dueño de un garaje (v. *supra*, n° 21) es una obligación de medios en donde la culpa del deudor se presume (Civ. 1<sup>ra</sup>, 9 de junio de 1993, *D.* 1993.IR.178).

<sup>72</sup> V. también lo que respecta al carácter de depositario del dueño de un restaurante que pone a disposición de sus clientes una guardarropía, Reims 28 de junio de 1976, *J.C.P.* 1977.IV.275, *D.* 1978.IR.207, obs. Larroumet y, en lo que compete a un tintorero, Civ. 1<sup>ra</sup>, 24 de marzo de 1987 *J.C.P.* 1987.IV.191. En cambio, a propósito del robo de pieles que habían sido confiadas a un artesano, se determinó que éste sólo era responsable si su culpa era probada por el acreedor (París, 18 de febrero de 1987, *D.* 1987.IR.53), de donde podemos deducir que la presunción de culpa, tanto en contra de los depositarios como de los que le son asimilados, no tiene una aplicación general y sistemática en la jurisprudencia.

del animal, el entrenador se presume culpable). En virtud del mismo fundamento, en el comodato, corresponde al comodatario, que se presume culpable, aportar la prueba de ausencia de culpa y no al comodante probar la culpa del comodatario (Civ. 1<sup>ra</sup>, 10 octubre de 1995, *Bull. civ.* 1, n° 353, *D.* 1996. *Somm.* 118, obs. Delebecque; Civ. 1<sup>ra</sup>, 6 de mayo de 1997, *R.J.D.A.* 1997, n° 1198; Civ. 1<sup>ra</sup>, 6 de noviembre de 2002, *Contrats, conc. Conomm.* 2003, n°37, *Rev. contrats* 2003.130, obs, Seube; Civ. 1<sup>ra</sup>, 1ro. de marzo de 2005, *J.C.P.*2005.IV.1821). Cuando, una venta se rescinde de mutuo acuerdo y en consecuencia el comprador debe restituir la cosa al vendedor, es posible subordinar al comprador a una obligación similar a la de un depositario, lo que justificaría una presunción de culpa en contra del comprador (Civ. 1<sup>ra</sup>, 11 de abril de 1995, *Contrats, conc. consom.* 1995, n° 113, obs. Raymond). Asimismo ocurre respecto a la obligación de conservación del arrendatario (Civ. 3<sup>ra</sup>, 28 de enero de 2004, *D.* 2004.IR.537), haciendo aplicación del artículo 1732 del Código Civil.

En estas diferentes hipótesis, en ningún pasaje del Código Civil se menciona expresamente la presunción de culpa. Sin perjuicio de lo anterior, la presunción de culpa puede fundarse en bases sólidas. En efecto, aquel a quien una cosa le fue entregada y debe devolverla en buen estado está en realidad sujeto a dos obligaciones. Por un lado, debe restituirla al momento previsto en el contrato. Esta obligación de restituir se asemeja a la obligación de entregar. Debemos por lo tanto, tal como sucede con la obligación de entregar, considerarla como una obligación de resultado. Por otro lado, el deudor está obligado a restituir la cosa en buen estado. Se trata de la obligación de conservar la cosa. Esta obligación, conforme a lo prescrito por el artículo 1137 del Código Civil, no es más que una obligación de medios. Sin embargo, en virtud de estar ambas obligaciones ligadas en su cumplimiento, relativo a restituir la cosa (obligación de resultado) en buen estado (obligación de medios), podemos pensar que, al menos en cuanto a la prueba, la obligación de restitución subsume en ella la obligación de hacerlo en buen estado. Es lo que explicaría que en caso de que la cosa no pudiese entregarse por haber desaparecido por culpa del deudor, quien incumplió su obligación de conservación, esta culpa sería

presunta. En consecuencia, en virtud de la conexión entre ambas obligaciones, compete al deudor probar que la cosa pereció sin mediar culpa suya, sin por ello obligarlo a probar una causa inimputable. Ciertamente nos resta analizar la hipótesis en que la cosa es restituida en mal estado. En este caso, ambas obligaciones ya no están vinculadas, y en consecuencia sólo se trata de la conservación y no ya de la restitución. Un razonamiento lógico estimaría que se debería volver a que el acreedor sea quien pruebe la culpa. Sin embargo, la presunción de la culpa bien parece coincidir con la aptitud para asumir la carga de la prueba, en el sentido que es más fácil para el deudor demostrar que no incurrió en culpa, que para el acreedor probar la culpa del deudor. En efecto, el acreedor no está en condiciones de conocer exactamente las circunstancias en las cuales el deudor conservó la cosa.

La jurisprudencia también ha admitido que la responsabilidad del mandatario podía también fundarse en una presunción de culpa. Más específicamente, si el mandatario cumple su obligación, pero el mandante estima que este cumplimiento es incorrecto, será éste quien debe probar la culpa del mandatario; en cambio, si el mandante no obtuvo resultado alguno, porque el mandatario no ejecutó su obligación, la culpa será presunta (Civ. 1<sup>ra</sup>, 18 de enero de 1989, *D.* 1989.302, nota Larroumet, *Rev. trim. dr. civ.* 1989.558, obs. Jourdain y 572, obs. Rémy; Civ. 1<sup>ra</sup>, 16 de mayo de 2006, *D.* 2006.IR.1564). Ciertamente, cuando el cumplimiento es imperfecto, compete al mandante probarlo, es decir, a través de la prueba de culpa. Sin embargo, no resulta así cuando el incumplimiento es total. En efecto, el solo hecho que el mandatario incumpla con su obligación no constituye por sí mismo culpa. La culpa sólo es posible admitirla a la luz de todas las circunstancias que circunscriben el incumplimiento. No obstante, a la hora de un incumplimiento total, resulta más fácil para el mandatario demostrar que no incurrió en culpa que para el mandante demostrar la efectividad de la culpa. Podemos admitir, en consecuencia, que la aptitud para sobrellevar la carga de la prueba permite presumir la culpa del mandatario. Por lo demás, la solución no debería ser exclusiva al mandato. Tiene una aplicación general para todas las obligaciones de medios, y esto sin considerar que la jurisprudencia algunas veces

admitió una presunción de culpa en contratos donde la aptitud para sobrellevar la carga de la prueba no era determinante (cf. Com. 13 de marzo de 1990, *J.C.P.* 1990.IV.185, a propósito de un restaurador). Yendo más allá de las hipótesis recién consideradas, la jurisprudencia ha admitido a veces la existencia de presunciones de culpa difícilmente justificables (cf. Montpellier, 20 de enero de 1992, *J.C.P.* 1993.II.22125, nota Bories, a propósito del dueño de un parque de juegos náuticos para niños).

En cambio, cuesta menos entender que la Corte de Casación haya admitido una presunción de culpa en contra de una clínica en la hipótesis en que un paciente contrajo una infección en una sala de operación durante una intervención quirúrgica (cf. Civ. 1<sup>ra</sup>, 21 de mayo de 1996, *Bull. civ.* 1, n° 219, *J.C.P.* 3985, n° 24 y s., obs. Viney, *Resp. civ. y ass.* 1996. Chron. 29, por Groutel, *Rev. trim. dr. civ.* 1996.913, obs. Jourdain, *D.* 1997. Somm. 287, obs. Mazeaud, *Rev. jur. com.* 1997.59, nota Hassler, *Rep. not.* 1997.408, nota Bénabent, *Rep. not.* 1997.749, obs. Mazeaud). Ciertamente, a una culpa de este tipo podría habersele aplicado el régimen de derecho común según el cual la carga de la prueba atañe al demandante. Sin embargo, la aptitud para sobrellevar la carga de la prueba exige que se altere la prueba. En efecto, mientras que el paciente está imposibilitado de probar culpa, la clínica tiene los medios para convencer que no ha incurrido en culpa. La aptitud para soportar la carga de la prueba es el mejor criterio para determinar en quien recae la carga de la prueba de culpa o de la ausencia de culpa, lo que demuestra que la cuestión está sujeta a consideraciones circunstanciales<sup>73</sup>.

#### χ) La gravedad de la culpa<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> No hay que confundir la cuestión de la carga de la prueba de la culpa con la cuestión relativa a la carga de la prueba del cumplimiento de una obligación, asunto que nada tiene que ver con la culpa. Sabemos en efecto, que la jurisprudencia ha admitido una exención de prueba en beneficio del acreedor de una obligación de información, en cuanto compete al deudor de esta obligación probar que la cumplió y no al acreedor probar que el deudor la incumplió. (N. del T.: El autor, en otra sección del libro explica que esto se debe a que, en todos los casos, se trata de una prueba difícil sino imposible de aportar).

<sup>74</sup> *Bibliografía*: Jambu-merlin, *Dol et faute lourde*, *D.* 1955, chron. p. 89; Roblot, *De la faute lourde en droit privé*, *Rev. trim. dr. civ.* 1943.1; Mazeaud, *L'assimilation de la faute lourde au dol*, *D.H.* 1933. Chron. p. 44; LALOU, *La gamme des fautes*, *D.H.* 1940. Chron. p. 20; Ghestin, *La faute intentionnelle*